

David Morales Bello

LA DOCTRINA
SOCIALDEMOCRATA
EN
VENEZUELA

SEGUNDA EDICION

1

Ediciones
ACULPUEBLO



El volumen que ahora entra en circulación contiene el estudio realizado por el Dr. David Morales Bello en torno a las ideas que informan la doctrina socialdemócrata y a la aplicación que, según el autor, ésta ha tenido en Venezuela.

Su título, "APLICACION DE LA DOCTRINA SOCIALDEMOCRATA EN VENEZUELA", es la denominación general de un contenido que comprende una visión desde la perspectiva socialdemócrata, un perfil de la sociedad a construir, la interrogante ¿a dónde va Venezuela?, la definición de la crisis en la Venezuela de 1984, el diagnóstico de la situación nacional venezolana y la explicación de las medidas oficiales orientadas desde el 23 de Enero de 1984, fecha de inicio del presente período gubernamental, a poner en marcha al país.

El trabajo preparado por el autor, y que fue expuesto ante los concurrentes al Seminario-Taller realizado recientemente en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, organizado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Fetrabolívar, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y la Organización Internacional del Trabajo, dio origen a una viva discusión que se prolongó por espacio de dos horas en un especial ambiente de altura.

DAVID MORALES BELLO

**APLICACION
DE LA
DOCTRINA
SOCIALDEMOCRATA
EN VENEZUELA**



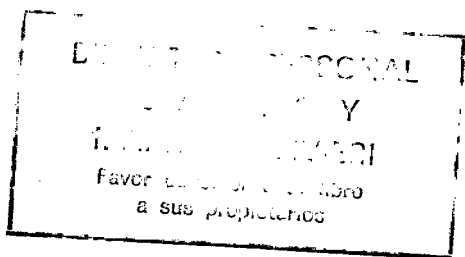
Conferencia dictada en Ciudad Bolívar,
el 27 de julio de 1984, en el Seminario-
Taller organizado por la C.T.V.-FETRABO-
LIVAR-O.I.T. e ILDIS.



111

DONACION
DE:

Maritza Caglianone
Sep. 2004



CONTENIDO:

I

**UNA VISION DESDE LA PERSPECTIVA
SOCIALDEMOCRATA**

LA SOCIEDAD A CONSTRUIR

II

**¿A DONDE VA VENEZUELA?
CRISIS Y DIAGNOSTICO**

III

EL PAIS EN MARCHA

I

**UNA VISION DESDE LA PERSPECTIVA
SOCIALDEMOCRATA**

LA SOCIEDAD A CONSTRUIR

Una de las premisas fundamentales por las cuales se deslindan las doctrinas políticas y las percepciones de los pueblos frente a la realidad es, sin lugar a dudas, su entendimiento de los procesos históricos.

Hay sociedades cuyo inmovilismo es producto de una postura maniquea y determinista frente a la historia que las lleva a aceptarla con alto grado de fatalismo conforme al cual la voluntad colectiva y el hacer diario nada tienen que ver con la modificación del presente.

Existen doctrinas progresistas que le otorgan al hombre el papel primordial en la transformación del presente; que ponen al ser humano al frente de su propio destino, siempre y cuando su acción sea el producto de una fuerza social, de una voluntad colectiva que, agrupando el consenso de las necesidades mayoritarias, enrumbe y dé sentido a la vida individual para la construcción de la sociedad norte a que se aspira.

Como se puede apreciar, en ambas posiciones existe toda una derivación de consecuencias sociales, de actitudes distintas frente a los problemas que origina la vida en común y de posibles respuestas, pero más allá de esas diferencias obvias, está también el germen de la vida política y de las doctrinas que alimentan la lucha social.

Para nosotros como acciondemocratistas, como socialdemócratas y gente de mentalidad progresista, la historia es el producto de la acción del hombre, la cual se escribe por encima de las tendencias voluntaristas del líder o del monarca, en razón de que su realidad es determinada tan sólo por la múltiple convergencia en ella del pueblo hecho comunidad.

Por ende, la misión política de los socialdemócratas es la interpretación de las condiciones objetivas y subjetivas que explican la acción popular, que engloban a las fuerzas sociales y que, a partir de una idea nacional, puedan, con el aporte de todos, consolidar el mejoramiento material, espiritual y cultural de la vida en común.

Esto tiene una relevancia fundamental cuando intentamos explicar (por un mandato del buen entendimiento del quehacer político)

lo que pensamos respecto al devenir de la patria, porque es allí donde podemos fundamentar nuestro argumento central, a los fines de deslindar nuestra interpretación de ese devenir en términos de lo que creemos debe ser nuestra lucha política.

Entender que la historia es producto del hombre y su acción colectiva significa, por tanto, suscribir la doctrina cuya cosmovisión ideológica niega los dogmas o las verdades absolutas que caracterizan los determinismos, y pasar —como lo precisa la ideología socialdemócrata— de esa premisa central a la actuación en el cuerpo social bajo la búsqueda permanente de una actitud mental capaz de generar el máximo de fuerzas posible, a los fines de garantizar un proceso constante de modernización y transformación.

Con esto queremos decir que buscamos, de una manera flexible, integrar las fuerzas sociales y políticas posibles a nuestro proyecto, bajo la única condición de que se subordinen a una sociedad-tipo, determinada por la Justicia y la Libertad como herramientas para hacer la historia; es decir, para transformar el presente.

Esos dos requisitos de Justicia y Libertad redefinen la manera como el pueblo organizado

se propone cambiar su realidad, toda vez que ponen énfasis en la transformación cualitativa de la vida social, que han de emprender aquellos sectores cuyas condiciones de desigualdad demandan más urgencia. Debe así mismo dirigirse el esfuerzo a la búsqueda de la reducción de esa desigualdad siempre en un clima voluntario de progreso colectivo donde crecer en conjunto no comporta el olvido de la necesidad de mejoramiento más acelerado de los menos favorecidos por una dotación original de elementos materiales, sociales y culturales.

Esto significa que nuestra lucha está invariablemente signada por la búsqueda de un consenso entre las partes integrantes del bloque político con la intención de facilitar el progreso de todos, con la advertencia de que debe concederse prioridad en ese propósito a los más desafortunados.

Sin embargo, es conveniente subrayar en este momento que esa perspectiva socialdemócrata de la vida política es, como veremos más adelante, una constante que impulsa el crecimiento de los niveles de bienestar social no sólo por razones éticas sino por un convencimiento intelectual de que es ésta la mejor manera de modernizar y hacer progresar a una

sociedad. Porque, si en una sociedad dada, la distribución de oportunidades y bienestar se realiza de una manera muy desigual, las mayorías a las que no se brindan oportunidades para alcanzar el pleno uso de sus potencialidades, estarían restándose del esfuerzo productivo de todos: lo que quiere decir —en términos crudos— que se derrochan hombres y mujeres y se retardan las posibilidades de lograr superiores estadios de bienestar, tanto para aquellos que no disfrutan de suficientes oportunidades como para los originariamente privilegiados.

Esta característica de la sociedad socialdemócrata, del pensamiento democrático social mismo, es lo que ha llevado a un sinnúmero de investigadores de la teoría política a llamar a los socialdemócratas los creadores de la sociedad del bienestar y de la sociedad del crecimiento; hecho plenamente comprobable, si observamos que aquellas sociedades como las escandivas, en las cuales la acción ininterrumpida de la socialdemocracia se ha prolongado más en el tiempo, son las que han alcanzado mayor nivel de bienestar y mayores tasas de crecimiento material. En ellas se distribuye riqueza nueva, de manera efectiva, entre todos los integrantes del tejido social.

Esta clave del discurso socialdemócrata resulta de suma importancia respecto a la tarea de delinear no sólo la sociedad que tenemos como desideratum, como referencia ideal necesaria, sino también la acción práctica de la colectividad en la cual la socialdemocracia rige los destinos políticos.

Se desprende de esto que la socialdemocracia requerirá, de entre las diferentes interpretaciones económicas de la realidad, de aquellas que pongan el acento en un crecimiento de las potencialidades de los más (los menos afortunados), creando la infraestructura necesaria para dar a sus vidas dignidad por medio del trabajo y de la productividad.

Los socialdemócratas vemos en el Estado el instrumento mediante el cual el ahorro social se invierte en función de la multiplicación del bienestar, apuntalado a su vez por la progresiva incorporación de todos a la vida útil.

De allí que, conforme a nuestro pensamiento, la capacitación, la insistencia en la educación y el adiestramiento, sean piezas angulares de un proceso largo pero continuo que sirve para sacar al hombre de su impotencia individualista.

Ese largo proceso de integración de todos al bienestar, de reducción de las desigualdades, tanto por un imperativo ético como por una necesidad histórica de transformación, se nos vuelve eje social, bloque histórico, que nos lleva a postular a nuestro movimiento como una "Unión orgánica de clases explotadas... para la liberación nacional..." como se consigna en la Tesis Política de Acción Democrática.

Unión de clases, porque entendemos que, dado nuestro contexto latinoamericano y nuestra realidad venezolana, es obligante procurar la coincidencia de los intereses de la clase trabajadora en forma integral, y los de los densos sectores marginales, con los de la clase media que es, en buena medida, producto de la superación de los sectores no privilegiados de donde mayoritariamente proviene.

Ese bloque integra a hombres y mujeres al uso de los bienes comunes de los ahorros sociales (en nuestro caso de la renta petrolera), y amplía las oportunidades de todos. Así, la acción del Estado centra su lucha política en la conquista de una sociedad donde la igualdad de oportunidades efectivas no olvide la necesidad de un mínimo indispensable de satisfacción material.

Entender que debe existir igualdad de oportunidades no necesariamente significa que todos los hombres y mujeres son iguales y deben ser iguales en su realización social. Creemos en la diversidad del tejido social, en la pluralidad de las vocaciones y deseos de los individuos, y, de allí, que por respeto irrestricto a la libertad social aceptemos como mejor forma de organizar la sociedad la que descansa en las vías democráticas que consagran la participación efectiva.

A nuestro entender, la igualdad de todos está en los derechos y deberes, en las oportunidades que para realizarse la sociedad debe garantizar a los integrantes del pacto social, tanto por razones de estricto sentido moral como por razones de eficiencia, y, por ello, para los socialdemócratas el Estado y la cuestión del Estado es esencial en nuestra acción política.

Nuestra condición de hombres creyentes en una democracia cuya obligación primordial es buscar el bienestar general, nos impide aceptar como auténtica la fórmula democrática que se reduce a una enumeración abstracta de derechos. Por ende, a la vez que consideramos indispensable la legitimación proveniente de la voluntad mayoritaria, reclamamos

la integración del bloque histórico que, al dar origen y sentido al partido como tal, garantice la real democracia, la real igualdad de oportunidades, y promueva activamente la democratización de las otras áreas de la vida en común: la vida económica, la vida cultural, la vida social.

En términos culturales, ese bloque debe ser canalizado hacia la integración de los componentes de la sociedad en pos de una meta nacional, que acerque a los distintos integrantes geográficos y sociales de la vida republicana bajo un perfil y patrón venezolano y venezolanista, y que no sólo se conecte a los valores immanentes de nuestro gentilicio y de nuestro pasado, sino que dinámicamente evolucione conforme la sociedad va superándose a sí misma por obra de sus realizaciones.

En términos sociales, el bloque socialdemócrata intentará la hegemonía de la vida civil, la organización de los intereses para que ellos se concierten y subordinen al bien común, sin que dejemos de pensar que esa organización también tiene como obligación mejorar la calidad de la vida de los agrupados.

En términos económicos, los socialdemócratas exigiremos a la base productiva de la

sociedad su subordinación al hombre y las necesidades básicas de la mayoría, como condición indispensable para el crecimiento. Esto quiere decir que para nosotros la eficiencia no está desconectada ni de los procesos históricos ni de las circunstancias sociales en las cuales opera. Se es eficiente, social y económicamente hablando, cuando, usando la totalidad de los recursos disponibles para la sociedad, se logra integrar el máximo número de personas para que puedan contribuir dignamente, y mediante su trabajo, al engrandecimiento de la sociedad.

Este punto requiere un poco de elaboración porque, en los momentos de crisis, no faltarán quienes, valiéndose de su poder económico, intenten promover lo que he llamado un "Club de Mezquindades" argumentando falsedades históricas para tratar de disimular su resistencia ante el interés colectivo y su negación a transitar por las vías emergentes de los remedios necesarios, fingiendo al mismo tiempo compartir cuestiones principistas que cubran de impostura para presentarlas en términos amoldados a sus propias conveniencias.

Cuando se ataca al Estado venezolano y su actuación en el plano económico, cuando se le

acusa de ineficiencia y, en base a este argumento, se exige el abandono de políticas de promoción e intermediación de la vida económica, se está en esencia pidiendo que la sociedad caiga en una especie de remedio peor que la enfermedad, porque, como consecuencia, el no crecimiento, el estancamiento y el retroceso en el producto bruto son las únicas “ganancias” que se pueden esperar de esa decimonónica posición.

El capitalismo irredento lleva a los grandes trusts, a los desequilibrios más agudos. Fue precisamente la experiencia de la gran depresión mundial de los años 30 lo que obligó a los economistas del mundo a revisar aquellos esquemas que consagraban el principio de la no intervención. Las Políticas Keynesianas de mantenimiento de la demanda agregada devolvieron a la economía mundial un período de crecimiento inigualado en algún otro lapso histórico desde 1941 hasta 1978, cuando se produjo la segunda revisión de los precios petrolero. Por su virtud, la economía mundial se ensanchó más de 1.500 veces que en los períodos anteriores y la innovación y la modernización —con significado de humanización de las condiciones de trabajo— permitieron una vida más digna para todos.

Para nosotros los latinoamericanos, esos remedios que se nos quieren vender ahora como panaceas son de trágica memoria, porque los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Perú han vivido o están viviendo las consecuencias de tales experimentos. Allí, el grueso de la clase trabajadora, en nombre de una ortodoxia monetarista y de la mal llamada economía de la oferta, ha caído en abismos económicos que, según cálculos de la CEPAL, requerirán más de dos generaciones para su recuperación. Baste señalar que para 1983 Chile tenía un Producto Industrial Bruto igual al de 1973 y que, sin embargo, su población había aumentado en casi un 25%.

De la misma manera, los latinoamericanos no podemos entender cómo alguno de nosotros pueda apoyar de manera entusiasta ese experimento de la llamada Economía de la Oferta que puso en práctica el Presidente Reagan de los Estados Unidos a sabiendas de que esa política sólo ha creado un gigantesco déficit en las finanzas públicas estadounidenses con la secuela de altas tasas de interés y el perjuicio de los países deudores del tercer mundo y parte del mundo desarrollado. También los capitales especulativos, necesarios en otros lugares para sacar al mundo de la

etapa recesiva en que se encuentra, han sido atraídos por la banca norteamericana con los deplorables resultados conocidos.

Esto no quiere decir que no evolucionemos con el tiempo ni que perdemos energías valiosas en disquisiciones dogmáticas más propias de académicos de la economía que de estadistas conscientes de su responsabilidad para con el presente y el futuro.

Hemos visto cómo las demandas salariales sin contrapartidas productivas y la regulación excesiva pueden retrasar y menguar en muchos casos las iniciativas y cómo es menester controlar las variables de gastos y endeudamiento a niveles que no resulten una pesada carga para las generaciones que nos han de suceder.

De igual forma hemos advertido cómo el énfasis puesto en el sector moderno de la economía, con sus problemas industriales y circulantes, nos ha cegado momentáneamente sin que nos hayamos dedicado, con profundidad, a entender el fenómeno de la llamada economía informal, donde operan realidades muy distintas a aquellas que proclaman los libros de texto tradicionales.

Más de la mitad de los venezolanos, de una manera u otra, concurren a esa economía, y la elevación de sus niveles productivos, su apoyo en muchos casos, se hacen imperativos si queremos operar en el campo económico con un nivel de penetración y realismo que nos lleven a fomentar, en el intermedio de nuestra lucha por una sociedad desarrollada, niveles de elevación social efectivos.

Finalmente, la socialdemocracia venezolana se plantea el problema de la superación colectiva en el plano nacional como un estadio más de las necesidades colectivas de integración de los pueblos. Para nosotros, esa interpretación de la historia y su motor y centro, esa voluntad de justicia y vocación de libertad, se entroncan, en una necesidad de solidaridad continental, con el resto de las naciones latinoamericanas, en la persecución de estos valores.

Fue precisamente el producto acumulado del sacrificio heroico de los socialdemócratas venezolanos lo que hizo posible la Constitución de 1961 que establece, de manera inequívoca, el mandato de luchar, en el plano internacional, por la promoción de estos valores.

Para nosotros no es posible un divorcio entre Venezuela y el resto del contexto geo-

gráfico, ilusión de enajenados que, lejos de darnos una categoría distinta, nos cercenaría las inmensas posibilidades que tienen los pueblos cuando hacen efectiva y equitativa su integración.

El mundo de hoy, sometido a los embates de una crisis económica sin precedentes en la historia más reciente, amenazado por el armamentismo y la política de bloques más suicida que hace de la paz un equilibrio de la capacidad de exterminio, requiere de fuerzas y actores nuevos en el plano mundial e internacional que aireen, sin falsas pretensiones protagonistas, un ambiente de racionalidad.

Veamos cuáles pueden ser los frutos de esa interdependencia.

El mundo de hoy posee, en los centros desarrollados, industrias y complejos motrices de producción que han declinado su vocación y su eficiencia. Se trata de industrias en las cuales los niveles de salarios y la sencillez relativa de las tecnologías que se usan las convierten en más rentables y más factibles de mantenerse en los países en vías de crecimiento. De igual manera, los países más pobres y aquellos todavía víctimas de la mono-producción pueden ofrecer un Fondo Mundial

de Materias Primas necesarias al mundo desarrollado a precios estables que permitan la planificación de la vida económica de esos países y, al mismo tiempo, les hagan accesibles nuevas inversiones para la diversificación productiva. Esa base mutua de beneficios puede lograr y forjar un Nuevo Orden Económico Internacional, en el cual las cuestiones monetarias, cambiarias y comerciales se armonicen para que los niveles de producción, empleo y comercio de los países se eleven y se reduzcan los conflictos y las políticas de guerra.

Si este conjunto de posibilidades está allí, es deber de nosotros contribuir a la sana búsqueda de esas metas mediante la organización de los países latinoamericanos para el diálogo constructivo que permita acelerar estas reformas que el mundo requiere.

Así, cooperación, integración y diálogo, se convierten en la extensión socialdemócrata de las necesidades de transformación estructural que nuestras políticas proponen en el plano nacional a los venezolanos de hoy. Las nuestras son políticas diseñadas tanto por las realidades específicas de nuestro suelo, nuestra historia y nuestras luchas como por nuestra

universal vocación de justicia y libertad. Son, en esencia, un camino posible para la esperanza, esa tan ausente en el hombre latinoamericano que, excitó decir a Gabriela Mistral, que ha macerado nuestra memoria con la experiencia del polvo, la miseria, la soledad y el miedo.

Es porque hemos de desempolvar las fuerzas del cambio de nuestros países, porque creemos posible superar las miserias acumuladas de nuestros pueblos, porque creemos que la lucha política es la posibilidad de superar la soledad individual de nuestros hombres y porque entendemos la lucha común de ese bloque histórico como el arma para vencer todos los obstáculos, que creemos en la legitimidad de nuestra doctrina, la validez de las ideas que nos mueven y el realismo de nuestros propósitos.

Hay enormes potencialidades que falta poner en acción. Nada hace pensar que no se dinamizarán. El hecho de nuestra clara conciencia con respecto a lo que está pasando tiene que estimularnos como actores de lo que habrá de sobrevenir. Ni siquiera es de sospechar que abduquemos al papel que el pueblo ha puesto en nuestras manos. No somos insensibles ni insensatos.

II

¿A DONDE VA VENEZUELA?

CRISIS Y DIAGNOSTICO

La Venezuela de 1984 pareciera ser, para densos sectores de la población nacional, una pesadilla que pocos imaginaron posible hace sólo cinco años.

Las expectativas que se plantean a los jóvenes de hoy parecieran reducirse en relación a aquellas que se abrían a las generaciones que los antecedieron. Nuestra falsa imagen de país rico pareciera estrellarse contra la situación de nuestros pagos internacionales. Los planes y proyectos ambiciosos, que hace sólo diez años convocaban a los venezolanos a soñar y trabajar por la Gran Venezuela, encuentran hoy innumerables críticos de oportunidad que recuerdan a la sociedad, con dedo admonitorio, cuan iluso y temerario fue pretender "pensar en grande".

En el lustro que acabamos de concluir, Venezuela no sólo no creció sino que, por vez primera, vio reducir su Producto Bruto. Hoy, en términos materiales, los venezolanos somos

más pobre; el desempleo empezó a causar estragos, desde hace un lustro, en los pueblos y las ciudades intermedias, y se enseorea hoy en ciudades como Puerto Ordaz, donde, irónicamente antes el problema existió a la inversa.

Sumado a esto, las voces de investigadores económicos y sociales han coincidido en llamar la atención sobre las condiciones que presentan la marginalidad, la infraalimentación, la distribución del ingreso y otros indicadores de la calidad de la vida que destruyen el mito según el cual algunos cínicos sostienen que en nuestro país los pobres no sólo son ínfimos sino que, además, la pobreza crítica no existe.

En 1984, las elecciones municipales produjeron una solicitud de participación real que no se vio satisfactoriamente correspondida, desencadenándose una confusión que ha conducido a las voces más lúcidas de todos los partidos a pedir una revisión a fondo de ciertos supuestos, visto que éstos ya no pueden seguir operando en el seno de una sociedad que, a todas luces, parece superada en relación a su sistema de representación local.

Esta es, en esencia, parte de la superficie que hemos descrito como retrato de la actual

crisis venezolana. Parte tan sólo, porque hay otras razones más de nuestra estructura que pueden explicar con mayor profundidad la crisis misma, sus interrelaciones y sus vasos conductores por todo el cuerpo de la nación. Superficie, porque en ella sólo vemos los síntomas de una crisis de crecimiento que obliga a profundizar en la forma como hemos conducido la democracia venezolana.

Sin embargo, con la multiplicación de intentos parciales para explicar la crisis y la reiteración sin concierto, se corre el riesgo de trivializar la magnitud de ésta, de jugar un poco con la palabra hasta convertirla en una moda que en el subconsciente de la gente se fije como algo pasajero que no despierta las fibras y resortes morales de la nación, tan necesarios no sólo para superar las actuales dificultades sino también para solventar las deudas que la democracia tiene consigo misma y con las grandes mayorías nacionales.

Es por ello que, en este intento de explicar a dónde va el país, reiteramos una perspectiva, una visión que se enmarca en lo que somos, en nuestra doctrina socialdemócrata, para, impulsándonos en ella misma, lograr una respuesta de conjunto que, en definitiva,

armonice con la labor central de la lucha política que atendemos.

Entendemos la política como algo capaz de hallar respuestas que puedan incorporar a todos a un esfuerzo común. El político es un generalista que profundiza en la comunidad; alguien a quien el dicho de que nada humano le es ajeno debe regirle sin que por ello caiga en el siempre existente peligro de la superficialidad.

Hagamos pues de la política ese instrumento y aportemos a quienes nos escuchan los argumentos que debemos proporcionar en nuestra obligación de persuadir y demostrar que cuando el país nos ha entregado la máxima responsabilidad estamos a la altura en el diagnóstico y en la praxis para hacer cierta la promesa de poner a nuestra sociedad en marcha.

El Petróleo, motor de la economía por espacio de casi setenta y cinco años, ya no es capaz de financiar al resto de las actividades productivas del país y la premisa de su constante incremento en valor parece estrellarse contra las realidades internacionales que limitan su uso y su predominio.

Este solo hecho, de por sí, hubiera causado a los venezolanos de ayer suficiente preocupación como para declarar una emergencia nacional. Sin embargo, este ingrediente fundamental en nuestro examen de las realidades que moldean el presente es tan sólo una de las características que definen el quehacer nacional. Junto a este hecho se presentan graves situaciones de agotamiento de las instituciones políticas y sociales que, en conjunto, obligan a la actual dirección política del país a actuar sobre el tejido social de la nación con una prisa y una vocación de urgencia del tamaño de los retos enfrentados.

De allí que hoy, más que nunca, sea válido examinar el derrotero y esbozar el camino, no como un simple ejercicio de vanidad o preciosismo doctrinal, sino como una abierta invitación a la sociedad venezolana a que acompañe a los socialdemócratas en esa necesidad de imaginar con realismo, un país distinto al que hemos conocido.

Lo decimos conscientes de que bajo nuestra responsabilidad se ha puesto la dirección de los asuntos públicos, de que bajo nuestra conducción, hoy como ayer, hemos de forjar un nuevo bloque histórico que allane caminos diferentes para superar los retos planteados.

Es esa y no otra la identidad socialdemócrata que la deslinda del resto de las corrientes políticas y es ella la característica que, con mayor orgullo, exhibimos como credencial válida para aspirar a la confianza del conglomerado social sin cuyo concurso no podremos superar la crisis.

Para nosotros, la búsqueda de un consenso posible que integre a los elementos más dinámicos de la sociedad es lo que permite la tarea modernizante y progresista de despertar imaginaciones y fuerzas latentes. No nos creemos poseedores de una verdad revelada que rechaza otros aportes. Los socialdemócratas venezolanos buscamos la participación activa de la ciudadanía, entre otras cosas porque sólo la inyección de voluntades va a poder despertar un conjunto de fuerzas que haga posible la concreción de una nueva base material sobre la cual descansa la vida en libertad.

Pero la búsqueda de ese consenso tiene que estar ligada a lo que, en nuestro juicio, son las necesidades más importantes del país, las deudas estructurales que la democracia tiene consigo misma y con un grueso número de venezolanos para quienes la Venezuela petrolera no significó incremento sustancial alguno en sus niveles de vida.

De manera que el consenso está determinado por un marco político al cual nosotros, como socialdemócratas, no debemos renunciar en el triple intento de convertir a la democracia venezolana en más democrática, más productiva y eficiente y más justa.

Por ello, nuestro diagnóstico, aún cuando pudiera coincidir con el de otros sectores en lo coyuntural de la presente crisis, es sin embargo estructural en cuanto a lo que debe ser afectado de nuestro cuerpo social, de nuestra cultura como pueblo, para poder llegar a soluciones de largo alcance que afecten la organicidad misma de la vida venezolana.

Hoy encontramos una sociedad con una enorme crisis de crecimiento. Se han agotado los factores que en el pasado alimentaron el vertiginoso ascenso que, por espacio de dos décadas, experimentó la economía venezolana, caracterizada ayer por altas tasas de incremento del producto bruto y una relativa moderación de sus precios.

Igualmente, la sociedad venezolana, producto de un estilo de desarrollo acelerado con la última subida de los precios internacionales del petróleo, mantiene la paradójica situación derivada de la crisis estructural que afecta su

sector externo de la economía, con una serie de obligaciones muy superiores, a corto y mediano plazo, a los posibles ingresos de divisas que el aparato productivo del país podría generar.

Sumado a esto, la principal industria del país: la industria petrolera, acusa deterioro en su capacidad de autofinanciamiento al trasladarse al Banco Central sus divisas y al utilizarse sus programas de reinversión de manera inconvincente.

Como cuarto síntoma de la situación general de nuestra economía observamos una acelerada disminución del nivel de empleo en el sector privado y una situación de absoluto desguarnecimiento de éste ante las nuevas realidades cambiarias y monetarias que el país va a enfrentar en el futuro previsible. Este hecho lo evidencia tanto la caída de la inversión privada como la composición de ésta, cuando la mayoría de las nuevas inversiones se dirigen a actividades circulatorias, especulativas, y las menos a reproducir el stock de capital productivo disponible por la sociedad en su conjunto.

Estos cuatro factores conforman una situación económica estructural de la que no puede

desligarse el análisis de la problemática general del país por su profunda conexión con el resto del cuerpo social. De este conjunto de hechos de comprobación general parte la acción de gobierno a corto y mediano plazo en materia económica.

Paralelo a esta situación de la economía, nos encontramos con un país al cual el efecto acumulado de la cultura petrolera y la realidad de una sociedad hasta cierto punto permisiva, le ha roto aquellos diques de contención por los cuales las crisis generaban corrientes importantes de rectificación con acento en valores de trabajo y sacrificio colectivos indispensables para el rediseño del esquema del país a que aspiramos.

La cultura del trabajo y el esfuerzo se ha deteriorado hasta tal punto que el mero índice de rentabilidad relativa permite apreciar cómo en el lapso de 20 años el campo ha desaparecido y las casi tres cuartas partes de nuestra dieta alimenticia es importada, mientras la producción agrícola, en el mejor de los casos, se estanca o retrocede, como ha ocurrido en la mayoría de los rubros de importancia.

Hay un hecho social generalizado que inculca el ocio no reproductivo, que decrece la can-

tividad y calidad de la producción cultural, que burocratiza el cuerpo social y que hace de los grupos de presión una rémora para la sociedad en su conjunto. Esto permite la reproducción de un discurso público corrompido por un populismo de fácil aplauso en la galería, pero oneroso a las metas necesarias por su efecto continuista de un espejismo de país rico que no se compadece con nuestra realidad.

Esta deformación, propia de una cultura que cada día se enajena más, es lo que hace posible la emergencia de los fenómenos como la drogadicción y la apatía, la ausencia de vinculación entre el ciudadano y su habitat social; lo que, en definitiva, alimenta la cultura individualista extrema, que le cercena al país las posibilidades de reacción indispensables para superar nuestro mal momento.

Pero detrás de esa crisis se esconde una Venezuela marginal cuya mayor acusación al conjunto del país es el espectáculo de la ociosidad social de fuerzas que se tienen y se requieren para someterlas a trabajos más resaltantes y productivos. Esa sociedad que carece de lo indispensable observa atentamente a la otra y el nivel del discurso público ya no puede explicarle, con un grado permisible de legitimidad, el divorcio entre ambas.

El país denunciado por el Proyecto Venezuela, malnutrido, subeducado, con nivel de vida infrahumano, representa una acusación permanente contra la democracia social, que nuestra Constitución proclama y ordena, y es, al mismo tiempo, un derroche de posibilidades que nuestra base productiva ya no puede mantener por cerrarse las fronteras de expectativas sin límites basadas en el esfuerzo de nadie.

El otro exponente de esta necesidad social, indispensable para explicar el rumbo de nuestra acción y la Venezuela que nos empeñamos en perseguir, lo constituyen las expectativas que se ciernen sobre la juventud venezolana bien preparada y mejor tecnificada para escalar posiciones direccionales en la nación. Esa generación va a ser la primera que vea disminuir sus expectativas y a la que el conjunto de la sociedad debe ofrecer otra perspectiva para encarar la realidad dado el agotamiento de lo que hasta hoy ha sido nuestro estilo de desarrollo.

Finalmente diremos que estamos presenciando un país en el cual los parámetros de credibilidad del sistema democrático y sus organizaciones políticas y aún del Estado mismo, sufren severo cuestionamiento. Por con-

secuencia, hay disconformidad con la manera como la sociedad venezolana encamina su proceso democrático.

Todos los segmentos sociales, en cada una de sus expresiones, reclaman cada vez más activamente la participación vinculante de gobernantes y gobernados. Se pide, sin ningún tipo de subterfugios, una democracia que eleve a los mejores, que incremente la competencia de las doctrinas y personajes políticos en base a las alternativas que ofrecen a todos y como producto de sus conexiones con el país real.

El país que había de ser modernizado, producto de la voluntad de una élite esclarecida, ya no es el mismo. Se han agotado los programas originales por su exitosa culminación y ante ellos tenemos una sociedad infinitamente más compleja, informada y educada, con nuevos factores de poder y de fuerza social, a la que sería suicida poner al margen en el intento de rehacer el prestigio de la democracia.

Creo que este diagnóstico de triple intención puede mantener un nivel de consenso muy amplio sobre el cual hacer descansar una coherente obra de gobierno. De la misma manera, él encierra claves del discurso socialdemó-

crata que permiten aludir a ese triple reto de hacernos más productivos, más legítimos y más justos. Sin embargo, en su interpretación escuchamos constantemente manifestaciones importantes que encierran un pesimismo que no compartimos, sin que profesemos tampoco un optimismo sin base.

Es precisamente en una encrucijada como la actual cuando se puede autodefinir de nuevo un perfil de pueblo sin que la sociedad venezolana acuda a los instrumentos de violencia e incompreensión entre partes que tanta desgracia han provocado y provocan en los pueblos de nuestros hermanos latinoamericanos.

Le democracia venezolana, en las actuales circunstancias, puede proclamar con orgullo e inteligencia que ha cubierto una etapa de consolidación y de diseño de las instituciones fundamentales para la vida en libertad, que ha modernizado al país de una manera sensible y que, en el proceso, ha mejorado al venezolano, porque la cultura de su libertad ya no es más el monopolio de unos pocos, sino la vida y expresión de todo un pueblo.

Es de allí de donde sacamos la fuerza y la convicción de que no hay problemas insuperables; de que a esta hora corresponde otra di-

mencción de nuestra vida en común, pero que en nada ha cambiado la tenacidad del venezolano para trazarse su propio futuro y hacerlo con el barro de su propio testimonio. Es porque creemos que la historia la hacen los hombres y los pueblos y que ella no tiene el determinismo que algunos le quieren atribuir, que sentimos fe en nosotros mismos para responder a la confianza consignada en los comicios calibradores de la confianza que nos ha deferido la soberanía popular.

III

EL PAIS EN MARCHA

Muy a pesar de nuestra convicción de que la crisis venezolana tiene dimensiones tanto políticas y sociales como culturales, cuya evasión pudiera hacer estériles los esfuerzos a realizarse en otros campos para corregir desequilibrios, creemos que hoy por hoy existe un común denominador sobre la jerarquía y prioridad que tiene, para el resto de las emergentes reformas por realizar, la devolución a la sociedad venezolana de su confianza económica, que no es otra cosa que la restitución de la base material sobre la cual la democracia actúa como un entendimiento en libertad, para la conquista de realidades concretas.

De allí que la economía haya merecido preferencial atención por parte del Gobierno del Presidente Jaime Lusinchi, en reconocimiento del estado calamitoso que presenta.

Como hemos señalado anteriormente, para nosotros existe una crisis de crecimiento que se evidencia en el estado de estancamiento

presentado por nuestro Producto Territorial Bruto en los últimos cinco años, con crecimiento negativo a final del período e incidencia lesiva en el valor del signo monetario.

Como respuesta a esa crisis, el Ejecutivo Nacional decidió establecer nueva paridad monetaria que permitiera, mediante el cambio de precios relativos de Venezuela con respecto al mundo, devolverle una demanda nacional a la industria y hacer factibles, en algunos sectores, la posibilidad de competir efectivamente con el exterior, logrando la exportación de bienes diferentes al petróleo o el hierro.

Este simple hecho cambiario permitirá la ampliación o recuperación estable de un empleo generado por la industria, que llegó en 1983 a niveles de utilización de su parque instalado de casi un 30%.

Esa nueva paridad del bolívar al dólar permitirá, sin lugar a dudas, un reequilibrio de nuestras cuentas internacionales, al encarecer las importaciones y alejar del país aquellas no esenciales. Así mismo estimulará la sustitución de muchos insumos de importación por materia prima nacional y el aumento de empleos en el sector primario de la economía.

Dentro de nuestra intención de ir al fondo de la crisis de crecimiento, el Ejecutivo Nacional ha reconocido, con gran sinceridad, el agotamiento del mecanismo de redistribución de la renta petrolera a través del ensanchamiento del gasto público consolidado en nuestra economía.

Ese modelo, válido para las realidades de la economía venezolana de los años 60 y 70, ya no es capaz de generar mayor crecimiento.

Ya no es posible mantener un sistema económico que no contemple, con primordial atención, un sano desarrollo del sector agrícola y pecuario. Esto es importante por los requerimientos de alimentación de nuestra población y por la posibilidad de proporcionar las materias primas necesarias para que nuestra industria se haga más autónoma y tenga mayor efecto reproductivo.

Conscientes de esto, los socialdemócratas venezolanos nos hemos dedicado, con gran sentido de realismo, a la reforma del Estado, para que el gasto público pueda ser controlado de una manera más efectiva y, al mismo tiempo, para generar, con su reforma, fuentes de crecimiento distintas al petróleo. Tal vez, y

muy a pesar de los difíciles momentos en que nos encontramos hoy en día, esta crisis resulte oportuna para que los venezolanos hagamos buena nuestra intención de sembrar definitivamente el petróleo.

En este sentido, y dentro de la Ley que autoriza al Presidente de la República para adoptar medidas económicas y financieras requeridas por el interés público, se autorizó al Ejecutivo Nacional para reordenar la Administración Pública y ya se han dictado medidas pertinentes para la liquidación de varios entes gubernamentales cuya ineficiencia y cuya corrupción estaban amenazando con trasladar a los sectores de la producción sobre los cuales actuaban sus vicios y taras ancestrales. Me refiero a, por ejemplo, la Corporación de Mercado Agrícola y la Corporación Venezolana de Fomento, a las cuales se ordena liquidar para evitar sigan siendo sangrías para el erario público y fuentes de innumerables vicios administrativos.

Estas medidas de reordenamiento del Estado, clamadas por todos pero, nunca aplicadas antes, demuestran la voluntad que tiene este gobierno de actuar sin contemplación de intereses distintos a los que dicta la conveniencia

nacional y sin hacer concesiones a un populismo criminal que, por no afectar intereses poderosos, pudiera estimular prácticas dañinas a todos.

La liquidación de la Corporación de Mercado Agrícola nos lleva directamente a la necesidad de activar nuevas fuentes de crecimiento que subsanen problemas estructurales de la economía con un evidente costo social para la comunidad en su conjunto.

Por espacio de casi veinte años, los venezolanos vivimos un falso espejismo de contención de una inflación necesaria a fin de generar los ingresos que hubieran hecho atractiva la vida en el campo y posible su crecimiento y su vigor como sector de la producción. Hoy, producto de la imposibilidad de seguir atendiendo nuestra demanda de alimentos con divisas escasas, y de mayor valor, hemos tenido que aceptar que ese modelo basado en la explotación del campo por la ciudad debe terminarse, y en ese proceso no sólo tenemos que aceptar mayores precios reales para los productores agrícolas, sino realizar un enorme esfuerzo organizacional (que no puede hacerlo sólo el gobierno) para eliminar a los intermediarios que se benefician tanto de productores como de consumidores. La eliminación de la Corpora-

ción de Mercadeo Agrícola se inscribe en este esfuerzo, sin que el gobierno abandone sus políticas de apoyo a los cultivos y de seguro para las cosechas, o de precios mínimos para éstas.

La eliminación de este organismo se hace conjuntamente con la creación de mecanismos especiales de financiamiento por parte del tesoro público, a fin de pagar las deudas contraídas por el Estado con los productores agrícolas y consumir el refinanciamiento. El Estado garantizaría las deudas de esos productores con el sistema financiero nacional, eliminándose quizás el mayor fardo que se había echado sobre las espaldas de los trabajadores del campo. Además, la disposición del Banco Central de Venezuela de incrementar la cartera obligatoria que la Banca privada debe dedicar a la agricultura a 22,5% del total de créditos otorgados, más la tasa de interés preferencial de un 8,5%, han de proporcionar a los pioneros de nuestra agricultura un estimado de 18 mil millones de bolívares en fondos a su disposición para así eliminar la necesidad de apoyo directo del Estado, a ese sector.

Esta circunstancia, coyuntural para algunos, apunta hacia la creación de una especie

de fondo de una solidaridad económica entre los distintos sectores para atender al problema urgente de la moderna Venezuela de construir una nueva estructura económica.

Cuando se obliga a la Banca privada a hacer colocaciones tanto en el campo como en la agroindustria (22,5% de la cartera crediticia) se está asegurando un financiamiento que por la propia naturaleza de la Banca privada, va a alejar el fantasma de la corrupción o moratoria permanente que plaga los financiamientos oficiales, amén de excluir el favoritismo y clientelismo político, sin olvidar la inyección de prosperidad que recibe el resto de la economía y el país en general, con la cimentación de una agricultura fuerte y sana.

En ese nuevo esquema ha de conservarse un sector financiero estatal que atienda a los más débiles y corrija aquellas fallas que el crédito del sistema privado acuse cuando, por ejemplo, el beneficio no alcance a quienes carecen de una estructura propietarial aceptable.

Ese es el verdadero papel de una banca oficial destinada al sector agrícola: promover y multiplicar nuevas formas de propiedad, atender a los sectores más necesitados que

los mercados imperfectos no atienden, pero nunca seguir subsidiando con intereses bajos y tolerancia de moras inaceptables a quienes componen el gran capital agrícola o la gran empresa agropecuaria.

Como último aspecto que prueba la atención del gobierno en las necesidades de crecimiento de la economía venezolana vale citar el otorgamiento de divisas a la paridad anterior a las empresas que mantienen un saldo neto pasivo con el exterior. Esta medida polémica, por la multiplicidad de intereses que a ella concurren, se explica por la urgencia que el país tiene de detener los procesos de cierres de empresas y de quiebras generalizadas que proliferaron en el período anterior. Estamos muy conscientes de que ello implica generar un sacrificio adicional a la Balanza de Pagos de Venezuela, porque se requerirán mayores esfuerzos para saldar nuestra deuda, pero la economía se inscribe en una realidad política y social de la cual no puede desligarse, y ese otorgamiento de dólares a 4,30 para el pago del capital y 7,50 para los respectivos intereses de la deuda privada externa, son un reconocimiento de lo imperfecto que es nuestro sistema económico privado, de

las necesidades que tenemos de mantenerlo, para robustecerlo a partir de su propia realidad, y, al mismo tiempo, atender las crecientes demandas sociales que el país plantea a la empresa privada venezolana.

Junto al otorgamiento de estas divisas preferenciales, la empresa venezolana ha contraído compromisos muy serios y firmes con el resto de los venezolanos que utilizamos esa propiedad pública que es el petróleo para apoyarla en su ampliación. Esos compromisos inicialmente se reflejan en las llamadas medidas compensatorias que ha dictado el Ejecutivo Nacional, obligando al mantenimiento de las nóminas al 31-12-83 e incrementando éstas en un 10% a fin de generar alrededor de 125 mil nuevos puestos de trabajo.

También se ha empleado esta filosofía de una nueva manera de enfocar los problemas de la colectividad, mediante la solidaridad entre sectores y agentes sociales en la idea de los comedores industriales, que habrán de contribuir a mejorar el valor real del salario de los trabajadores.

A quienes habiendo recibido un ahorro público considerable, reiteran su crítica a estas medidas, habría tan sólo que recordarles su

falta de entendimiento de la naturaleza del problema venezolano, de la fuerza que esta solidaridad efectiva tiene en las más ancestrales características de nuestra nacionalidad e historia de pueblo y, algo más grave, su falta total de confianza en sí mismos.

La nueva economía venezolana tiene, sin lugar a dudas, un espacio que permite un sinnúmero de nuevas actividades a las cuales las empresas ya constituídas, con un nombre comercial, podrían dedicarse o, al menos explorar para actividades futuras. El incremento de la nómina en un 10% debe ser el inicio de una nueva estrategia empresarial que podría hermanarse con las posibilidades reales de exportación.

De igual manera y dentro de las autorizaciones acordadas por el Congreso al Ejecutivo Nacional figura un conjunto de colocaciones financieras hasta por la cantidad de 60.000 millones de bolívares, destinadas a cancelar la deuda gubernamental interna, calculada en casi 69.000 millones de bolívares, así como las deudas para el sector de la construcción que alcanzan la cifra de 23.000 millones de bolívares.

Se piensa que este conjunto de medidas pueda producir el reordenamiento indispensa-

ble para que la economía venezolana reasuma su nivel histórico de crecimiento bajo nuevas fuentes e impulsos en 1986. A partir de ese año; y cuando se hayan saneado los elementos financieros que amenazan a las empresas, creado las nuevas bases por las cuales los aumentos de bienestar de la clase trabajadora sean repartidos como componentes del salario social por los empresarios y establecido nuevas fuentes de circulante y crédito para sectores vitales de la producción, los ahorros en divisas deberán dedicarse al mantenimiento de la capacidad utilizada en el parque industrial nacional, con el consiguiente incremento del empleo.

Estas acciones dirigidas al fortalecimiento de la capacidad de crecimiento autónomo de la economía venezolana son, sin embargo, medidas que no pueden ignorar la incidencia que la industria petrolera tiene aún en nuestra economía, la dependencia que todo el aparato productivo aún tiene de ella, no sólo en la forma de divisas generadas y necesarias, sino también su condición de comprador y contratador de servicios en áreas vitales como la metalúrgica, construcción naval, metalmecánica y otras.

Esta industria, básica en Venezuela por espacio de 65 años, ahora puede generar los recursos que permitan el tránsito de la sociedad petrolera a la postpetrolera de una manera más ordenada y menos traumática, pero, para ello, el sector petrolero nacionalizado debe atender sus necesidades de financiamiento y autofinanciamiento sin menoscabo de su eficiencia operativa y empresarial, y debe integrarse de una manera más dinámica al resto de las actividades económicas del país.

En este sentido, y atendiendo al carácter estratégico que tiene la salud del sector petrolero, el Ejecutivo Nacional creó la divisa de Bs. 6,00 por dólar a Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) para cubrir sus exportaciones, generando de esta manera un caudal cercano a los 29.200 millones de bolívares anuales más a los flujos de fondo que maneja el ente petrolero nacional para su adecuado financiamiento y expansión, así como la culminación de sus inversiones tanto en el campo del mercadeo internacional como en el del cambio de patrones de refinación. Ha sido por iniciativa de Acción Democrática en el Congreso y por iniciativa del Gobierno Nacional a partir de febrero de 1984 que se le ha devuelto a

PDVSA su autonomía operativa aprobándose un Convenio con el Banco Central de Venezuela para la utilización de las divisas que necesite esa empresa en sus operaciones.

Estas medidas han permitido, de una manera inequívoca, que PDVSA y el sector petrolero continúen ejerciendo importante función para no multiplicar la ya comprometida situación de endeudamiento nacional.

Otra preocupación del Ejecutivo Nacional que entronca el tratamiento del sector petrolero con el punto de la reorganización del Estado ha sido la utilización de la capacidad de compra de las empresas petroleras para el proceso de reactivación comercial y la planificación de prioridades económicas de la nación.

PDVSA, SIDOR y las grandes empresas del Estado, se han incorporado a un programa estricto de más compras venezolanas, manteniendo un nivel de demanda que permite generar mayor empleo al país.

Este intento de mantener los niveles de eficiencia de PDVSA e integrar sus políticas de compras hacia el refuerzo de la capacidad de producción de artículos en el país, deriva de

la crítica situación en que se halla nuestra industria básica más estratégica, la cual deberá superar planes de reposición de equipos y de exploración y explotación de nuevos yacimientos para el mantenimiento de su demanda internacional y las reservas operativas y probadas que aseguren un adecuado tránsito a la sociedad post-petrolera. Quizás el mayor crimen que se le hizo a las nuevas generaciones de venezolanos durante la pasada administración fue la desatención que el Ejecutivo mantuvo frente a Petróleos de Venezuela.

Esa situación de desguarnecimiento financiero toca otro aspecto fundamental de la corrección que estamos empeñados en aplicar a los males de fondo de la economía venezolana. Me refiero al estado en que se encuentran los mercados financieros, el sistema bancario nacional y los incipientes mercados de capitales.

El sistema financiero venezolano se caracteriza por su poca propensión a la inversión en actividades productivas. No ha estado sujeto a controles que garanticen la integridad de los depósitos del público y su utilización como punto de apoyo para la industria del país. Es notoria además su concentración en grupos económicos cada vez más reducidos.

Como quiera que hemos considerado la distribución del ingreso como una necesidad no sólo de orden ético y político a la que estamos comprometidos los socialdemócratas venezolanos sino también económico, el Congreso Nacional, a fin de asegurar una política en la cual el bienestar esté al servicio del hombre y se multipliquen las actividades del intercambio de producto y esfuerzo, ha facultado al Ejecutivo para reordenar el vital sector de nuestra economía para conducirlo al tope de actividad.

La autorización comprende la posibilidad de ampliar el plazo de financiamiento a diez años para las labores agrícolas por parte de la banca comercial y la creación de un seguro de depósitos bancarios.

De igual manera, una de las medidas restringirá el reparto de utilidades mediante dividendos a los accionistas en las empresas privadas. Esto para incentivar el ahorro interno en dichas empresas y para disminuir la presión sobre el sistema financiero una vez lograda la reactivación de la economía. En tales condiciones se facilitaría la aceptación, con mayor fluidez, de los bonos colocados para satisfacer las deudas del Estado con los produc-

tores, los constructores y los proveedores oficiales.

Ello generará un fortalecimiento de los mecanismos para la captación de ahorros diferentes a los tradicionales y la utilización por parte de las empresas de fuentes de financiamiento distintas al crédito bancario, agrandándose el papel que en este proceso le corresponde a la Comisión Nacional de Valores y a los mercados de capitales como definitiva respuesta para el cambio de los esquemas de propiedad concentrada.

Un mercado de capitales que distribuya la propiedad entre miles de pequeños ahorristas e inversores obliga también a la empresa nacional a un comportamiento diferente. Su responsabilidad y eficiencia han de ser mayores en la atención de esos ahorristas, y para que las nuevas formas de propiedad distribuida puedan ser parte de una respuesta encaminada a la ampliación del mercado venezolano.

Todo este esquema de recuperación, que supone sacrificios compartidos, se ha formulado en base a la consigna de que no hay derechos sin responsabilidades; de que no existen privilegios ajenos al compromiso social;

de que a pesar de su condición de privilegiado, todo hombre está indisolublemente ligado en su destino a la sociedad en que vive y de la cual depende su propia excepcional situación.

El Estado como tal no se ha apartado de esta moderna concepción, sino que la acata y promueve. Prueba fehaciente de ello son las nuevas conversaciones que el Ejecutivo ha entablado con el Fondo Monetario Internacional y con la Banca privada internacional, organismos que han admitido que existe una voluntad inequívoca por nuestra parte de satisfacer las obligaciones que tenemos pendientes, sin que por ello el Ejecutivo hipoteque la soberanía nacional ni el bienestar de las mayorías nacionales, que han sido ajenas a la creación de la actual situación.

Como producto de esa nueva postura del Estado, han surgido acuerdos preliminares sobre los cuales se discutirá la renegociación de la deuda externa venezolana, pública y privada. Se pretende así despejar el último nubarrón que se cierne sobre nuestro aparato productivo y permitir el restablecimiento de la confianza, la bonanza económica y la felicidad colectiva.

Si bien este conjunto de acciones se encamina a corregir lo que a nuestro juicio es medular a los problemas de nuestra economía, ese arsenal de proposiciones ayer, obra concreta hoy, no agota el quehacer del gobierno para reducir la brecha entre aquel país por el cual luchamos y la sociedad que tenemos para el momento.

Dentro de un plazo mediano, el Ejecutivo Nacional emprenderá la reforma a fondo del Estado. Esta reforma no se detendrá en la simple reducción y mejor control de los gastos públicos y, por ello, se ha nombrado una Comisión Presidencial de muy alto nivel, en la cual participarán venezolanos de amplia experiencia en manejo de las cuestiones del Estado, para que esbocen la organización de un Estado moderno, que habrá de operar sobre nuevas realidades y deje definitivamente atrás la idea de la sociedad paternalista.

De la misma forma, el Ejecutivo, con una visión de conjunto, aprovechará la existencia de empresas del Estado, en situación de competir en el mercado mundial, y las reimpulsará en su gestión comercial. Las despojará de las cargas financieras y asumirá sus compromisos. Empresas como SIDOR, ALCASA o VENA-

LUM, en las cuales la capacidad de generar nuevas divisas se ve enturbiada por un tremendo peso de pago de capitales e intereses, obtendrán, con la inteligente decisión oficial, un refrescamiento de caja que servirá para una mejor acción creativa de riqueza.

Este hecho merece un comentario de orden político, en un momento en que se ataca, sin consideración ni juicio alguno, a las empresas del Estado y se las somete a escarnio público debido a las cuantiosas pérdidas que acusan.

Cuando se efectuó la ampliación de Guayana, con las industrias básicas, había en los proyectos la promesa implícita de aportarles capital fresco, con el riesgo que la nación tomaba en las nuevas actividades económicas directas que asumía. Sin embargo, a las empresas a las que se encomendó la atención de esas industrias se les entregaron créditos en lugar de capital efectivo, créditos que tuvieron que pagar a tasas muy altas de interés que a su vez provocaron pérdidas cuantiosas e ingente daño a su verdadera efectividad. Hoy, cuando un dólar más favorable coloca a SIDOR y ALCASA o VENALUM en condición de exportar y generar una fuente impresionante de divisas, se nota que si se les quita el crédito

no arrojan pérdidas operativas y producen buenas ganancias para el país en momentos en que experimentamos una aguda escasez de dólares, debido a la situación de estancamiento que reina en los precios mundiales del petróleo.

Paralela a esa iniciativa orientada a ordenar al Estado, se plantea un programa real de reforma tributaria, cuyo objetivo sería reducir las desigualdades en nuestra sociedad, contribuir al financiamiento del Estado y servir de canalizador de las inversiones hacia sectores que consideramos socialmente prioritarios.

Esa reforma se ha iniciado ya con la elevación de las tarifas que se cobran por impuestos regulares, papel sellado y licores, los cuales, si no tienen una significación de primer orden en la jerarquía económica, marcan la pauta de una intención del Estado de ejercer su prerrogativa impositiva para entre otras cosas reducir el consumo exagerado de licores, contribuir a costear los gastos de la imprenta nacional y hacer valer a nuestras representaciones comerciales en el exterior como vehículos de incremento de nuestro comercio exterior.

A esa Reforma sucederá otra integral del Impuesto sobre la Renta, a fin de incrementar los niveles de recaudación y reducir las presiones deficitarias que tienen alto contenido inflacionario y pueden erosionar aún más el ya golpeado ingreso de las clases trabajadoras venezolanas.

En el campo del apoyo a la producción, el Ejecutivo Nacional ha dispuesto que los nuevos programas de inversión estatal estén encaminados fundamentalmente a la satisfacción de necesidades básicas y al estímulo de toda actividad generadora de alimentos. A tal efecto se están integrando el sector privado y el sector planificador regional en distintas zonas del país, como el Zulia y Monagas, lo cual logrará la incorporación de más de 950.000 hectáreas a la producción de artículos comestibles. De igual manera, se inició un ciclo de reuniones entre el gobierno, la banca privada y los trabajadores y productores de caña de azúcar para lograr nuevos niveles de financiamiento de las cosechas que aseguren una disminución importante de la importación de azúcar en nuestro país, utilizando para ello los centrales propiedad del Estado.

De la misma manera, a mediano plazo y obedeciendo a orden expresa del Presidente de la República, se van a devolver los dineros utilizados en el Fondo de Pensiones al Seguro Social y en el Fondo de Previsión de Cartera del Banco Central de Venezuela a partir de un programa de colocación de bonos de la deuda pública, que si bien van a elevar a corto plazo los niveles generales de endeudamiento se destinarán a un sector de la población al cual el Estado ha garantizado por Ley la inviolabilidad de sus ahorros, producto de su trabajo y ninguna justificación puede aducirse para defraudar la confianza que el trabajador venezolano debe tener en una institución tan fundamental como lo es el Seguro Social.

En relación a las grandes obras de infraestructura para las cuales se utilizará financiamiento externo, se están estudiando aquellas que mayor capacidad de empleo generen y que mayor impacto tengan en la reducción de desigualdades, en regiones donde la pobreza adquiere características más críticas. Planes como la reserva de Ticoporo y la culminación del Sistema Uribante-Caparo, Yacambú y la construcción de la planta de pulpa de papel para Uverito, en el Estado Monagas, son apenas parte de este nuevo mecanismo cuyo pro-

pósito es la integración de grandes planes de desarrollo al cumplimiento de metas sociales que el Estado venezolano necesita cumplir.

Igualmente, a mediano plazo, se instaurará plenamente el aprovisionamiento lechero del país, con un vigoroso impulso a la extensión agrícola por parte de Indulac, con el fin de ampliar la producción de ganado lechero que permita aumentar la capacidad instalada de leche en polvo y, a partir de allí, convertir en nacional el programa del vaso de leche con las variedades de lactovisión y PL puestas en marcha por el Instituto Nacional de Nutrición. Programa que pretende reducir las diferencias en el poder adquisitivo de nuestro pueblo que impiden a cierto sector una adecuada alimentación de sus hijos.

Las realidades que se desprenden del quinquenio que nos corresponde ahora dirigir imponen mecanismos compensatorios que de alguna manera alivien el explosivo problema de empleo que se ha desatado en el país, con especial referencia a los trabajadores de mayor preparación técnica, que se han convertido en evidente despilfarro por los recursos que el Estado ha invertido en su formación profesional. A fin de ayudar el Programa de Empleo

que habrá de mantenerse durante todo el quinquenio, se están preparando proyectos de autoconstrucción y autoequipamiento y se adelanta un Programa Nacional de Mantenimiento basado en la promoción de empresas pequeñas formadas por trabajadores y profesionales, que serán algo así como respuesta productiva a formas de asociación distintas a la empresa tradicional.

Quiero detenerme un poco en este punto, ya que este tipo de iniciativas, que hoy son programas concretos, responden a necesidades de una sociedad que en estos momentos nota sorprendida como se pretenden desconocer acuerdos a los que el Gobierno ha llegado con los empresarios y trabajadores a fin de darle una salida de conjunto a las necesidades de nuestro pueblo.

Si esos sectores que hacen profesión de egoísmo social no están a la altura de lo que el país les reclama, el gobierno, a mi juicio, debe buscar mecanismos de concertación con sectores capitalistas distintos a los representados por FEDECAMARAS. Una de esas formas es el estímulo a la producción directa y a la autogestión de los trabajadores, a la co-gestión obrera e integración con los profesio-

nales del país. Esto dará al Pacto Social una dimensión en lo económico que se compaginará con las necesidades políticas de alcanzar una sociedad más igualitaria, cuyas bases de sustentación sean el trabajo y la actividad productiva.

Paralelamente a este conjunto de medidas orientadas a reordenar la estructura económica, a los socialdemócratas se nos plantea hoy el reto de actuar en el campo político y social, lucha que hallará su mejor aliado en la clase trabajadora venezolana, ya que es a partir de ella de donde vamos a enfatizar nuestras demandas de una sociedad más justa y más libre.

Ello requiere de una estrecha unión entre el partido y el gobierno, para que el rol de nuestra organización política sea el de un vehículo comunicante y al mismo tiempo el de rector ideológico del país a través del estudio sistemático de nuestras realidades y la elaboración teórico-práctica para generar respuestas y alternativas válidas en el camino de la superación.

En este sentido, la primera gran reforma apunta hacia el propio partido, a fin de afianzar en él la idea del trabajo solidario, de la inves-

tigación doctrinaria y de su propia revaluación frente a las comunidades en las cuales actúa.

Como se podrá desprender del análisis que hacemos de la hora actual, la sociedad venezolana ha superado un conjunto de esquemas que pertenecían a la etapa de consolidación democrática a la cual concurren fuerzas sociales brillantemente cristalizadas en Acción Democrática. Nuevos tiempos y nuevas realidades obligan a pensar en nuevas fuerzas sociales que tienen estadios de lucha cualitativamente más altos y, por ende, son fuerzas superiores en su potencialidad a aquellas que el partido tradicionalmente liderizó. . .

Ejemplo singular de ello son ustedes, dirigentes de la clase trabajadora venezolana, que a partir de una extraordinaria madurez surgida de los convenimientos obrero-patronales de los años 60 han ido conformando un proyecto de sociedad que se plasma con nitidez en la Carta de Porlamar de la CTV, a la cual el partido tiene que responder no sólo con acciones concretas de su realidad de partido de gobierno sino con una idea de transformación de la acción política en la nueva sociedad venezolana.

De igual manera, existe hoy una realidad en el campo venezolano totalmente opuesta a aquella que integraba la Venezuela rural por la que comenzó la experiencia vital de Acción Democrática. Las necesidades estratégicas de producción, de generar un nivel de vida en el campo que haga posible la integración interna del país y su economía, como los retos que tienen planteados los hijos de los trabajadores del campo, hoy revertidos en peritos, ingenieros, técnicos y especialistas, son de tal dimensión que obligan a una revisión a fondo de la forma como se estructuran los movimientos agraristas de Acción Democrática y la respuesta que el propio partido ha de darles a quienes son en él representantes de un nuevo esfuerzo y síntesis del pueblo venezolano.

Llamo igualmente la atención sobre la angustia de la mujer venezolana, hoy preparada y deseosa no sólo de superar barreras ancestrales que restan a la sociedad un esfuerzo y una comprensión humanitaria de la dinámica social y de la sensibilidad humana, sino también de estar presente en la redefinición que a la familia venezolana y a nuestros hijos ha sometido el cambio cultural que nos trajo la revolución de los medios de comunicación masiva, la tecnología moderna y la multiplicidad de

la informática moderna. Hoy, la mujer venezolana es una aliada fundamental en la lucha por la transformación. La mujer ha ganado un puesto en la batalla de la producción, comparte con el hombre venezolano su sudor y por ende requiere su contribución de una gran receptividad. Hay que reservarle más y mejores escenarios políticos para la lucha que nos compromete a todos.

Las clases medias y los independientes en un partido al cual el momento exige menor grado de dedicación electoral y más trabajo, plantean en Acción Democrática una urgencia de asimilación que nos haga posible generar vastas fuerzas sociales de apoyo a ese cambio cualitativo de la sociedad venezolana a que aspiramos.

Esas clases medias son integrantes de un concepto más amplio de trabajadores manuales e intelectuales que debemos ganar y convencer para que, más que apoyarnos, se nos unan en la tarea de enfrentar los privilegios e irle dando una forma más estructural a eso que hemos definido como la sociedad socialdemócrata.

Organizaciones de defensa de los derechos económicos, de defensa de los consumidores, agentes dispersos en un mundo de realidades de poder económico concentrado son,

sin lugar a dudas, punto central en las tareas que el partido tiene que acometer. La defensa del patrimonio ambiental de las futuras generaciones y del equilibrio ecológico, es hoy una necesidad que no se puede dejar al cuidado de preciosistas si no queremos que los hijos de los trabajadores y los trabajadores mismos vivan en un caos donde la ruptura del habitat traiga como consecuencia el aumento de enfermedades *producto de la degradación de nuestra naturaleza.

Una vez redefinida esa transformación del partido, que es eje de la doctrina a la cual nos adscribimos, resulta lógico pensar en la enorme necesidad de trabajo teórico, de investigación y de análisis que la actual generación dirigente y la juventud del partido en particular tienen por delante.

Digo esto porque soy un convencido de que ha llegado el momento de redefinir al partido no como un grupo de poder sino como un instrumento de todos los socialdemócratas para hacer más palpable nuestra huella en la historia que a diario escribimos con nuestros actos. Las otras reformas de orden político que permiten una reducción sustancial del clientelismo y una transparencia más nítida en el Estado, la reducción de discrecionalidad del

funcionario y la subordinación de éste a las decisiones políticas democráticamente legitimadas, vendrán consecuentemente a contribuir a que la acción del Estado socialdemócrata sea efectiva y duradera.

Queridos compañeros de la dirigencia sindical, amigos patrocinantes de este ciclo de conferencias, queridos compañeros y coterráneos de FETRABOLIVAR: que ya nos estemos reuniendo para estudiar las distintas alternativas que en sí tienen los trabajadores de Venezuela frente a la hora meridiana que nos envuelve, es un adelanto y una garantía de que esa pasión carbonaria que abrasa a quienes estamos comprometidos en los procesos de lucha política ha calado hondo en la conciencia de los socialdemócratas venezolanos. Hoy estamos unidos por una reflexión que, en esencia, es una angustia por acertar en el camino escogido, por dar el mayor número de realizaciones a las altísimas expectativas que la sociedad venezolana ha puesto en nosotros. Esa reflexión va más allá de estos salones, así como esa inquietud, que a todos nos embarga, no es fruto de preocupación pasajera. Hoy, lo que ustedes están haciendo es una toma de conciencia y un acto de reiteración de la intelligen-

cia colectiva popular sobre la realidad que siempre ha retado a los pueblos del mundo.

La Venezuela que colapsó no fue el producto de la voluntad igualitarista de la dirigencia política ni de la función social del Estado. La nuestra no es una sociedad en quiebra ni las perspectivas y horizontes que se nos abren se han cerrado definitivamente. Los venezolanos no somos hijos del petróleo sino de nuestra capacidad de lucha. No somos la resultante de una sociedad fortuita sino el producto acumulado de casi dos siglos constantes de luchas y experiencias por la libertad, que han permitido afirmar una cultura con metas mucho más altas que la simple eficiencia de una isla de riqueza en medio de un mar de pobreza y miseria.

Producto de esa cultura, nuestra sociedad dispone del más alto equipamiento por habitante de la América Latina y de los niveles factoriales más modernos y las armas económicas más importantes para aprovechar la generosidad de nuestra geografía y nuestra patria. Hoy, a veinticinco años de la fundación democrática del país, poseemos un equipamiento humano que ha conquistado los más altos niveles del saber y que puede dominar y hasta generar la tecnología más compleja para ponerla al servicio del hombre y de la sociedad.

Sólo la multiplicidad de errores cometidos por fuerzas antipopulares que aprovecharon un reflujo de la voluntad popular que nos sorprendió con niveles bajos de la solidaridad necesaria y distraídos en problemas que, en esencia, no eran fundamentales, hizo posible la actual crisis. A ella se le suman las deudas seculares que la democracia, tanto en el orden político como en el orden social, tiene para con sus profesantes y sectores mayoritarios, pero este hecho triple en casualidad no es sino la chispa que ha de despertar la fuerza colectiva que en nosotros despega cuando las necesidades demandan una vanguardia política. Por ello, la hora actual es de optimismo, porque convoca, más que nunca, al trabajo hermanado, al sacrificio trascendente por una Venezuela mejor. La nuestra es una hora de optimismo porque en ella se están conjugando los hombres y mujeres del común para hacer suyo ese futuro, con un presente que significa abrirle las puertas a las reservas morales y éticas de una nación que sólo ha sabido dar de sí lo mejor cuando más adversas han sido sus circunstancias.

MUCHAS GRACIAS

Ciudad Bolívar. 27 de Julio de 1984.

APENDICE N° 1

A manera de apéndice, insertamos otro trabajo del Dr. Morales Bello, correspondiente a una de las conferencias dictadas por él, durante la campaña electoral nacional que culminó con las votaciones generales celebradas el 4 de diciembre de 1983, con el propósito de explicar la fórmula del "PACTO SOCIAL" presentada por el ahora Presidente de la República de Venezuela, Dr. Jaime Lusinchi.

Para ese entonces el autor, integrado al Comando de Campaña del partido "Acción Democrática", se mostró como uno de los más fervientes defensores del "Pacto Social", que continúa contándolo entre sus más decididos y auténticos partidarios.

EL PACTO SOCIAL

“...El Pacto Social requiere una confluencia de voluntades, porque un sector por sí sólo no puede acometerlo y porque además no puede ser responsabilidad de un segmento determinado de la sociedad. Sin los trabajadores, sin los empresarios de concepción moderna acerca del papel del capital, sin un Estado bien organizado, ese proyecto que demanda nuestro pueblo, no puede llevarse a cabo. No acometerlo con verdadera convicción sería tanto como condenar al país al azar del futuro, a las tensiones sociales, a la inestabilidad y al enfrentamiento. Por eso, también, cuando hablo de Pacto Social, lo asocio a la Revolución de los mejores, porque sólo con los mejores militantes de Acción Democrática y de otras fuerzas y sectores organizados, políticos o no y sólo con los mejores grupos o individualidades independientes, podremos acometer una tarea de tanta magnitud...”

JAIME LUSINCHI

(Discurso de proclamación de la candidatura presidencial en el “Poliedro” de Caracas).

**CONFERENCIA DICTADA POR EL DR. DAVID
MORALES BELLO EN EL INSTITUTO DE ESTU-
DIOS POLITICOS Y SOCIALES "MERCEDES
FERMIN", EN CARACAS, EL 10 DE FEBRERO
DE 1983.**

INTRODUCCION

Entre las muchas cosas que se han dicho en lo que va de la etapa electoral a finalizar con las votaciones del 4 de diciembre de este año, la única proposición clara, concisa, concreta, que ha surgido de alguno de los candidatos presidenciales y se ha convertido en motivo de discusión constante, ha sido la formulada por nuestro compañero candidato presidencial, Dr. Jaime Lusinchi, cuando, al aceptar su postulación en el Poliedro de Caracas, inicialmente de parte de Acción Democrática y luego de los trabajadores de Venezuela, perfiló su concepto del Pacto Social asomándolo como uno de los resortes que él accionará desde la Presidencia de la República para crear en el país la situación que conduzca al rescate del progreso nacional, comenzando por homogeneizar los esfuerzos en procuración de un mejor modo de vivir para el venezolano.

Esta idea lanzada por el Dr. Lusinchi se recibió con sorpresa por parte de los adversarios

de Acción Democrática, quienes creían erróneamente que nosotros nos incorporaríamos al debate electoral quedándonos en las cosas menudas, en todo caso intrascendentes, sin intentar siquiera un planteamiento de reestructuración económica y social para el país, guiados posiblemente por un empeño en hacer creer que Acción Democrática es un partido cansado, gastado y sin futuro.

La sorpresa que les causó el lanzamiento de lo por ellos inesperado, los llevó a reaccionar de manera diferente. Algunos —los más elementales— se refugiaron en la negación consistente en decir que no teníamos un concepto claro de lo que significaba el Pacto Social; que no lo podíamos explicar por ignorar, realmente, su naturaleza y su contenido y que, simplemente, estábamos utilizando un recurso efectista, con la finalidad de contar con un lema de carácter electoral, capaz de despertar interés en los desprevenidos. Mientras otros, apartándose un poco de la mera superficialidad, pusieron en tela de juicio la proposición de nuestro candidato presidencial, afirmando que constituía amenaza contra los económicamente débiles, a quienes se quería llevar, una vez más, al sacrificio, para servir, de manera

inaceptable, a los beneficiarios de la riqueza nacional.

Otras críticas hubo y continúan ensayándose, pero hasta ahora ninguna ha sido lo suficientemente penetrante como para tocar la médula de la proposición del Pacto Social formulada por nuestro candidato presidencial, y, por lo mismo, continuamos en espera de que surjan las objeciones de carácter sustancial, para responderlas con el conocimiento de causa que tenemos y con el interés que nos anima de contribuir a orientar, como siempre, la opinión nacional.

ORIGEN DEL PLANTEAMIENTO

La idea del Pacto Social no fue una ocurrencia de nuestro candidato presidencial tomada al azar, a manera de ensayo, para hacer vibrar el diapasón de la opinión nacional y ver cómo reaccionaba la gente al escucharla. Fue consecuencia de detenidos análisis, de estudios profundos, de observaciones y de aplicación de la inteligencia social, que hemos sabido desarrollar en Acción Democrática, hasta alcanzar su precisión, en el entendido de que hasta ahora los anuncios hechos por el Dr. Luisinchi sólo constituyen avances de las especificaciones a ser consignadas en el programa de gobierno actualmente en elaboración.

Por lo mismo, nuestras referencias señalan algo entendible, asimilable por parte del conglomerado nacional, a la par que constitutivo de promesa cierta, viable, real, que, incorporada a la acción gubernamental, va a contribuir, eficazmente, a mejorar las cosas a partir del próximo período constitucional.

En nuestro análisis pudimos observar que el denominado proyecto de democracia política, con veinticinco años de realizaciones en forma ininterrumpida, había significado para el país el alcance de un progreso que se resume en el aseguramiento de la libertad y que radica, esencialmente, en el ejercicio a plenitud de los derechos políticos que descansan en la soberanía popular como fuente originaria de poder, facilitando el desenvolvimiento plural que es característica respetable del proceso político que a todos nos reúne.

Ese progreso político, avanzado hasta alcanzar consolidación, no ha marchado parejo al crecimiento social diversificado y evidentes son los desbalances que patentizan la insatisfacción que requiere ser atendida en forma emergente.

Pudiéramos decir que estamos en presencia de un costo social demasiado crecido y que, ante él, Jaime Lusinchi ha querido apelar a los sentimiento de solidaridad no extraños al modo de ser del venezolano, para enfrentar y afrontar con éxito la complejidad llamada a desaparecer como lastre perjudicial al crecimiento armónico de lo que, de manera integral, constituimos Venezuela y los venezolanos.

Es, entonces, la clara noción del costo social que el país ha pagado para el aseguramiento del progreso político alcanzado, lo que nos ha llevado, en Acción Democrática, a esta toma de conciencia, precisada en nuestro planteamiento de que hace falta convocar un acuerdo para que, por la vía de la conciliación, intereses frecuentemente encontrados contribuyan a facilitar la aplicación de soluciones que a todos van a favorecer y que si bien sobrevendrán como ejecutorias del gobierno tendrán como origen y razón de ser el interés colectivo en amistad lo que hace falta armonizar para que todo no caiga en el difícil terreno de lo conflictivo.

REALISMO DEL PACTO SOCIAL

Por sus raíces económicas, políticas y sociales, el Pacto Social es realista y no idealista; es posible y no utópico; se enmarca en la realidad del país y encuentra en el devenir de los últimos veinticinco años de nuestra democracia asideros de orden diverso que sirven para demostrar que participa de nuestra propia historia y que cuenta con un crédito que no se le debe negar atrincherándose sus detractores en los muros de un prejuicioso escepticismo.

EL DIAGNOSTICO

Nadie puede negar, por ejemplo, que entre los desequilibrios actualmente palpables en el país figuran los de carácter financiero, tanto a niveles del sector público como del privado.

Esa circunstancia, muy grave por cierto, explica la crisis que ha venido acentuándose en perjuicio de la confianza nacional, porque el hecho de extenderse hacia todas las áreas deja sin posibilidades de auxilio interno efectivo las manifestaciones que terminan por sumarse en un gran todo descompuesto y desarticulado. Sin asideros visible, la economía del país da señales de agotamiento y todos lucimos pendientes de lo que sobrevendrá a corto plazo, pero no en el terreno de las superaciones sino en el de las complicaciones.

A la vista de todos está el hecho cierto de que el producto nacional ha venido marcando mermas en los últimos años. Esa disminución de lo que producimos —y no incluyamos el petróleo— encuentra consonancia en la calidad y rendimiento de la producción interna, en el sentido de que en nada ha mejorado la productividad.

Producimos menos y en baja calidad. Sufrimos crisis de producción. Y en el entendido de que por baja y mala producción las actividades rentables disminuyen, se concluye que ha venido aumentando la dependencia nacional de algo que no es de nuestro exclusivo dominio: el petróleo.

Sin producción suficiente y rendidora de lo que consumimos, nos falta el oxígeno de la infraestructura llamada a servir de soporte al andamiaje social. La economía anda a la deriva y la descomposición social adquiere grados amenazantes.

En el sector de los trabajadores se sufren las graves consecuencias de la disminución del valor real del salario y, dentro de esas consecuencias, destaca el empeoramiento de las condiciones de vida imperantes en la mayor proporción poblacional.

La agudización de los problemas que colectivamente afectan a esas amplias capas sociales se surte del debilitamiento de los recursos al alcance de quienes viven del trabajo. El empobrecimiento masivo acentúa las fallas existentes en los servicios públicos, distantes hasta lo indeseable de servir de complementación

a la débil participación de los trabajadores en el ingreso nacional.

Los componentes: disminución del producto nacional, no productividad, pérdida del valor real del salario y desequilibrios financieros, se han vuelto causa de retroceso para el proceso de industrialización, y el cese de actividades empresariales se ha traducido en un desempleo que ya pasó del 14 por ciento.

Si quienes trabajan obtienen cada día menos con su retribución salarial y quienes necesitan trabajar tienen cada vez menos oportunidades de hacerlo, sin duda alguna que aquí radica otra causa de desequilibrio social que, sumada a todas las otras, da impulso a la descomposición con exponentes causante a su vez de desasogiego colectivo, como es el aumento de la incidencia delictiva, no porque vayamos a aceptar la tesis de la pérdida del empleo, de que el aumento del desempleo y de la desocupación impulsan en sí la delincuencia, sino porque en la complejidad social, cuando se pierde el empleo, cuando aumentan el ocio y la desocupación, los trastornos que eso genera forman parte de un fermento por cuya consecuencia aumenta la incidencia delictiva.

Es evidente la relación que se forma, no por vía directa, pero sí por vía de la complejidad social, entre el aumento del desempleo y el crecimiento de la ola delictiva, llegándose a convertir la inseguridad personal, como ocurre ahora entre nosotros en Venezuela, en uno de los males colectivos más extendidos y con mayor penetración en la globalidad de los diferentes sectores de la población.

La desconfianza o falta de confianza ha venido consumiendo, progresivamente, el sosiego colectivo y así como hay temor de salir a la calle, existe igualmente el de asumir cualquier tipo de riesgo económico o financiero, hasta el punto de verse neutralizada toda capacidad de iniciativa particular con vista al progreso nacional.

La abstención, la retracción y la paralización de iniciativas progresistas se han echado a los mares y desde fuera nos llegan informaciones del descrédito que está dañando la credibilidad de que antes gozó Venezuela en los grandes centros financieros del exterior. Se nos baja de categoría como país buen pagador que hasta hace poco fuimos y se nos ponen trabas cuando los agentes gubernamentales van en búsqueda de prórroga en relación con obliga-

ciones morosas que el Ejecutivo Nacional confiesa no encontrarse en condiciones de cancelar con puntualidad. No se exagera entonces cuando se afirma que entre todos los males que estamos viviendo actualmente en el país, el de la crisis de confianza toma para sí la posición de abanderada doliéndonos muy de veras tener que reconocerlo así.

SOLUCIONES ADECUADAS

Ante este diagnóstico, real, palpable, comprobable y demostrable, un candidato presidencial como es Jaime Lusinchi, que no está en búsqueda de la Presidencia por considerarse individualidad sobresaliente en virtud exclusiva de excepcionales méritos personales, sino que es candidato presidencial porque fue **escogido democráticamente** en su partido y por su partido, para ser nuestro abanderado electoral en los comicios de 1983, tiene que sentirse motivado para recurrir a la inteligencia social que tiene y buscar soluciones adecuadas a los males que se precisan remediar. No puede decir: yo soy la solución porque para eso yo realicé el suficiente aprendizaje, sino comprometerse a procurar las contribuciones necesarias y posibles, a los fines de armar la plataforma sobre cuya superficie él como Presidente y los de-

más interesados en el mejoramiento del país plantarán las columnas firmes que servirán para ir dejando atrás el marasmo que en la actualidad nos debilita y nos consume como país con derecho a un destino mejor.

La idea del Pacto Social surge, así, como un mandato de la necesidad y como un recurso que no va a depender exclusivamente del Presidente de la República, ni va a depender exclusivamente del partido de la militancia del Presidente, sino que buscará cojugar sectores importantes de la producción para que, con el Estado en función de eje y parte concurrente, se organice una etapa de reconstrucción que sirva para enmendar los graves errores que se han cometido en la conducción de la política durante el actual período y, al mismo tiempo, se impulse un nuevo estado de cosas que venga a significar el rescate de la marcha hacia el progreso y hacia las metas del desarrollo, de las cuales, lastimosamente, nos hemos alejado bastante en estos últimos años.

Hay un principio biológico conforme al cual la necesidad crea el órgano. Exactamente igual nos está ocurriendo en Venezuela. Estamos necesitados de remedios certeros que, al responder a los problemas económicos existentes en

el país y al apuntar hacia los inconvenientes sociales que existen en el país, sirvan para aplicar políticas eficientes y rendidoras.

Esa necesidad colectiva ha inspirado, por intermedio del intérprete fiel que es el candidato presidencial de Acción Democrática, la idea del Pacto Social.

No es, entonces, una proposición que formula Jaime Lusinchi en razón de lucubraciones personales suyas, sino como intérprete fiel de una necesidad colectiva que reclama a gritos la aplicación en Venezuela de correctivos eficaces, emergentes y ajustados a nuestra realidad.

AUTENTICIDAD CONCEPTUAL

Esto es importante significarlo, porque interpretaciones erróneas que se han intentado hacer del Pacto Social propuesto por el Dr. Lusinchi lo han querido hacer aparecer unas veces como expresión calcada de otras que con anterioridad se han conocido a lo largo de la historia, o de experiencias hasta fracasadas que se señalan como habidas en otros países.

Desde luego, no podemos pretender nosotros que la denominación haya sido inventada por Jaime Lusinchi al precisar los conceptos

que la desarrollan y esto mismo nos lleva a admitir como cosa cierta la afinidad idiomática que existe entre la expresión "pacto social" y otras muy conocidas en el campo de la filosofía y de la política. Pero si bien es verdad que en épocas de Hobbes, de Locke o de Rousseau, se habló de contrato social para tratar de explicar el origen del poder (en un caso del poder en la monarquía absoluta, como fue la teoría de Hobbes; en otro, del poder en la monarquía constitucional, como lo hizo Locke, o en la República, como lo hizo Rousseau), la idea acciódemocratista del Pacto Social no guarda relación sustantiva con aquellas explicaciones filosóficas, como tampoco la guarda con otras expresiones más recientes, surgidas en la Inglaterra de Harold Wilson, en los Estados Unidos de Lyndon B. Johnson, en México y hasta en Argentina.

Muy posiblemente, la mayor diferencia entre aquellos intentos y esta fórmula nuestra estriba en que no perseguimos finalidades exclusivamente pragmáticas, orientadas como tales a resolver problemas de acomodo entre las presiones ejercidas por algún determinado sector operante en la sociedad correspondiente y otros sectores de mayor influencia en dos medios económicos del lugar.

Quizás el mayor acento de originalidad correspondiente a nuestra fórmula le viene, aparte de su procedencia, de la finalidad hacia la cual apunta, por cuanto el Pacto Social busca ser una vía, un ducto, por cuyo intermedio buscamos reunir los factores que hagan posible aplicar, con la mayor eficacia, la acción de gobierno a cumplirse en el próximo período.

Entendidas así las cosas, tenemos derecho a reclamar autenticidad para esto que estamos proponiendo con toda sinceridad y lo cual va a ser algo no sólo novedoso sino de mucho interés para los venezolanos, afiliados o no al partido Acción Democrática, porque, si en forma desprejuiciada se lo observa y se lo estudia, no será difícil advertir lo que encierra y lo que promete en esta hora difícil por la cual atraviesa toda Venezuela, a los fines de mejorar el sistema democrático establecido en el país.

DEMOCRACIA SOCIAL

Un gobierno atento a los principios de la democracia social debe esforzarse en hacer realidad la mejor distribución de la riqueza.

Un gobierno presidido por el Dr. Jaime Lusinchi —que será un gobierno de Acción De-

mocrática y, por lo mismo, responderá a los principios de la socialdemocracia— está llamado a realizar una acción que busque la distribución de la riqueza en el país. Y, en el momento de organizar el plan de gobierno correspondiente, el orden de prioridades que en él se establezcan le dirá a los venezolanos cuáles serán los problemas hacia los cuales orientaremos la atención preferente para, de manera gradual, ir pasando a otros; entendidos, como debemos estar, en que no es posible pretender abarcar, como abriendo un abanico, la totalidad de los problemas que existen agravados por los inconvenientes que se han presentado en el curso del actual período constitucional.

En otro orden de prioridades, estrechamente vinculado al que acabo de mencionar, se escalonarán las atenciones, los auxilios y los recursos de manera tal que el mayor acento beneficioso a ser procurado por el gobierno favorezca a quienes, por contar con escasos medios o por carecer de éstos, se sitúan en primer lugar como llamados a ver mejorar las condiciones de vida que llevan.

La razón de esta premisa es muy sencilla: la justicia social inherente al Pacto Social y la socialdemocracia que lo surte de contenido

doctrinario demandan la aplicación, pronta y humanizada, de un modo de gobernar conforme al cual los principios de equidad pongan cese a los desbalances por cuyos influjos continúan percibiendo menos los que más necesitan para vivir humanizadamente.

El Pacto Social habrá de encargarse de generar una situación de equilibrio en nuestro país por cuya virtud todos avancemos hacia el mejoramiento colectivo, pero bajo la indeclinable condición de que a los económicamente débiles deberán llegar primero los buenos efectos de la modificación y de que, complementariamente, los dotados de recursos propios en mayor cantidad ocupen posición de importantes contribuyentes a los fines de ahorrarle al Pacto Social el descrédito que significaría colocarlo en posición de complacencia para quienes, de manera egoísta, se niegan a contribuir con lo que bien están en capacidad de aportar para hacer menos dura la existencia de aquellos que sólo viven en medio de grandes dificultades porque les resulta imposible conseguir un lugar donde dedicarse a trabajar.

El Pacto Social, al servicio de ese propósito de lógica política, no se concibe con alcance limitado exclusivamente al próximo período

constitucional, pero es entendible que de su éxito en el curso de éste dependerá su contribución extendida en el tiempo más allá de los cinco años subsiguientes.

A Jaime Lusinchi le corresponderá la tarea inicial de echar las bases del entendimiento para que los sectores convocados en primer lugar —trabajadores, empresarios y Estado— armonicen intereses de ordinario enfrentados, y dependerá de los buenos frutos de esa conciliación introductoria la continuidad que es de esperar se vea favorecida por las mejores experiencias.

Con Jaime Lusinchi, el Pacto Social servirá para detener la descomposición que nos está aniquilando y, detenido el progresivo desequilibrio económico y social que ahora nos anarquiza, será posible abarcar otras áreas de la vida nacional, acrecentándose así un radio de acción que no hay por qué imaginar de manera menguada.

El principio será entonces el de la convocatoria a tres. Los tres factores ya mencionados: trabajadores, empresarios y Estado. ¿Por qué? Porque el Pacto es de naturaleza económica y estos tres factores están íntima, raizalmente vinculados a la vida económica nacional, a la

producción llamada a cumplir su papel de plataforma liberadora para alcanzar la transformación de nuestra democracia política en democracia económica y social.

La presencia del Estado, concebida bajo la doble faz de parte concurrente y eje moderador, obedece a la existencia entre nosotros de un capitalismo de Estado y de una organización constitucional que le atribuye a ese Estado autoridad y poder que en este caso se deben orientar hacia logros beneficiosos a la colectividad en general, tomándose muy en cuenta que, en Venezuela, la mala distribución de la riqueza atañe al Estado mismo, dueño como es de la mayor parte de la riqueza nacional.

La tríada de la conciliación funcionará bajo el patrocinio del Estado, con significado de contribuyente a racionalizar los esfuerzos de todos y no únicamente en uso de su autoridad o poder. El Estado dueño de las industrias básicas. El Estado propietario de la riqueza rural que posee. El Estado capitalista por excelencia, deberá adoptar la dimensión de parte de buena voluntad y contribuir con su poder a garantizar que los esfuerzos mancomunados de trabajadores y empresarios no se pierdan en el vacío. Después vendrán las ampliaciones,

incorporándose otros sectores de la vida nacional —políticos, culturales, etc.— para que la mayor concurrencia produzca resultados de beneficio mayor.

Será el crecimiento social del sistema democrático que tenemos establecido. Su mejoramiento a favor de una generosa vida en libertad, alcanzada de manera progresiva, gradual y pacífica.

LO NOVEDOSO

Esto, en términos venezolanos es cosa nueva, porque en el pasado reciente hablamos sólo de conjunción política, convencidos como estuvimos de que el orden de prioridades de ese entonces situaba en primer lugar la consolidación de la democracia política en el país.

Es nuevo, y es positivo, que apuntemos ahora hacia la conciliación que favorezca la necesidad en que estamos de producir más y en forma más rendidora. Que hablemos de hacer confluir esfuerzos, aunque los intereses sean de inicio contrapuestos. Que hablemos de un Estado con disposición a conciliar, cuando de ordinario estamos acostumbrados a obedecerlo y a verlo mandar.

Son nuevas pautas para la convivencia democrática venezolana. La vivencia de un “nuevo tiempo histórico”, como acertadamente lo expresara el compañero Manuel Peñalver, Secretario de Acción Democrática.

Exactamente de eso se trata. No hay experiencia. No lo hemos hecho antes. Pero es un nuevo tiempo histórico que se nos presenta signado de positivities. Podemos hacerlo, porque debemos hacerlo y porque estamos en condiciones de hacerlo. Hemos alcanzado mayoría de edad en conciencia política. Esto nos ha hecho alcanzar también una mayoría en el campo de la civilidad. Y todo esto integra en nosotros mismos una composición política y social que nos hace aptos para ensayar este tipo de cosas que pudieron lucir como una utopía en algún otro país, pero que, de acuerdo con lo que hemos logrado ser en estos últimos veinticinco años de vida democrática ininterrumpida, luce posible y hay razones para adivinarlo como conducente al otro gran alcance que hemos venido demandando: el establecimiento de un nuevo orden económico y social en el país; porque ¿cómo vamos a establecer nosotros en Venezuela un nuevo orden económico y social, si no establecemos inicialmente un piso firme que nos sirva de infraestructura

sobre la cual coloquemos la edificación de la reestructuración social y económica?

El nuevo orden económico y social, que es un desiderátum, tiene que ser una consecuencia de logros que aseguren su viabilidad. Y no andamos errados al afirmar que el éxito del Pacto Social será auxilio por excelencia para contribuir al acercamiento de esa esperanza, que es el establecimiento de un nuevo orden económico y social, más justo, menos traumatizante, más humanizado. El que promete la democracia social.

Apuntamos, a sabiendas, mucho más allá de lo que es la geografía nacional, porque todos sabemos que el planteamiento referido al establecimiento de un nuevo orden económico tiene dimensión internacional. Algo que es esperanza venezolana y esperanza también de otros pueblos sub-desarrollados del mundo. Pero nada imposible. Nivelador sí y, por sobre todo, justiciero. Por eso nos atrae.

EL POR QUE DE SU FACTIBILIDAD

¿Por qué, al decir que vamos a convocar a trabajadores, empresarios y Estado, estamos surtiéndonos de la realidad nacional que esta-

mos en la obligación impretermitible de atender en forma emergente? ¿Porque creemos que en los empresaros hay, por sobre todo, vocación marcada de servicio? ¿Porque creemos que los trabajadores deben ser quienes den el ejemplo? ¿O porque creemos que el Estado debe asumir la posición de resolverlo todo? No. Es el mismo análisis. Es el mismo auscultamiento y su correspondiente diagnóstico lo que nos hace ver que en esos sectores hay problemas palpitantes que bien pueden y deben resolverse mediante la conciliación que, de conjunto, los pongan al servicio de las soluciones que se deben alcanzar para beneficio de la colectividad en general.

LA SITUACION EMPRESARIAL

En el mundo empresarial existen problemas de producción. Esta disminución creciente de la producción en el país, tanto de la producción urbana como de la producción rural, ha venido generando una serie de problemas gravísimos, financieros y económicos, que, al incidir en el campo empresarial, han causado y causan en la actualidad quiebras y hundimientos económicos que mantienen muy vulnerada la empresa venezolana. Además, los empresarios tienen también problemas de productividad, por

cuanto, durante el pasado período constitucional, cuando, para impulsar la industrialización, hubo una política de auxilio de recursos con énfasis en los pequeños y medianos productores, se importaron e instalaron equipos con una gran potencialidad que, al no haber podido funcionar o continuar funcionando a plenitud, han caído en subproducción. Por tanto, lejos de incrementarse la productividad, ha disminuido la producción y hay en el país una capacidad ociosa de instalación que reclama remedio urgente.

Si se lograra que los equipos instalados en el país funcionara a cabalidad, sin duda alguna que los beneficios pudieran ser mayores, extendiéndoselos a los trabajadores y a la colectividad en general.

En muchos casos, la falta de buen funcionamiento de las instalaciones industriales genera problemas de financiamiento y de pago oportuno de las obligaciones comerciales, que no alcanzan a solventarse mediante los créditos otorgados por los organismos estatales. A lo cual hay que añadir los problemas de mercado, muy influidos por la disminución del valor real del salario de los trabajadores y por la mala situación económica imperante actualmente en el país.

No están entonces los empresarios en situación de negarse a contribuir con sus esfuerzos a un mejoramiento colectivo surtido en parte con la racionalización y moderación de las ganancias y beneficios por ellos legítimamente obtenidos.

Es esta realidad presente en el mundo empresarial la que nos lleva a pensar que, llamados los productores para que se incorporen a esta conciliación que supone el Pacto Social, para que contribuyan con sus esfuerzos a resolver problemas que ellos tienen, pero que otros tienen también, pudiera ser —y es de pensar que así sea— que, por inteligencia y hasta por instinto de conservación, concurren y contribuyan a establecer ese piso firme sobre el cual queremos fincar la mejor distribución de la riqueza que se propone obtener el gobierno progresista a presidir el Dr. Jaime Lusinchi.

LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores también tienen sus problemas y ya los hemos mencionado. ¿Cuál problema mayor para los trabajadores que la angustia de no poder atender a satisfacción las necesidades particulares y familiares con el sala-

rio que obtienen? ¿Y cuál angustia mayor que la de estar amenazados constantemente con la reducción del empleo y, por consiguiente, con la pérdida de la ocupación, que es la vía para obtener recursos destinados a resolver las necesidades individuales y familiares? Por supuesto que sobre los trabajadores también gravitan, con mucha más fuerza, los problemas de carácter social, porque el mal funcionamiento de los servicios hospitalarios, el mal funcionamiento de los servicios públicos en general, a quienes más lesiona, a quienes más daño causan es a quienes menos recursos tienen y esos son los trabajadores.

Hay, entonces, sin duda alguna, un problema de desempleo, de sub-empleo, de pérdida del valor real del salario, que afecta a los trabajadores, y esto se complica con los problemas derivados del pésimo funcionamiento de los servicios públicos, que les hacen prácticamente imposible llevar una vida humanizada. El Pacto Social busca garantizar que el salario no se erosione y busca también sumar los esfuerzos de los trabajadores al aumento deseado de la productividad, moderando y racionalizando —también— los intereses y reivindicaciones del sector. Todo sin comprometer el desarrollo económico del país. Razones hay

para pensar que los aportes de los trabajadores no se harán esperar, porque hay suficientes antecedentes que hablan bien del sentido patriótico de sus actuaciones. Como ejemplo concreto podemos citar el "Pacto de avenimiento obrero-patronal" firmado en 1958 entre la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras y en momentos cuando la preservación de la economía nacional lo aconsejó, no obstante venir la fuerza trabajadora del país de padecer las consecuencias de la dictadura perseguidora de la libertad sindical.

SITUACION DEL ESTADO

Y el Estado mismo, ese Estado rico, ese estado poderoso, que tiene el gran capital entre sus manos, también tiene gravísimos problemas. En las industrias básicas establecidas en el país hay graves problemas de producción, hay serísimos problemas de productividad, hay gravísimos problemas de mercado, hay preocupantes problemas de financiamiento. Y cada vez el Estado luce como más incapaz de poder atender y resolver eficientemente esos problemas. Entonces, este Estado poderoso está necesitado de auxilio concurrente. ¿Y quiénes más que los empresarios y los trabajadores, que son sus congéneres en unas

cuantas actividades, para venir a formar confluencia y armonizar con él ese piso firme sobre el cual el mismo Estado va a facilitar la recuperación social y económica del país en general?

SENTIDO PLURALISTA

Estamos pisando entonces, sobre la tierra. Estamos manejando los problemas que existen. Estamos calibrando las necesidades y estamos ideando las soluciones aplicables a esas necesidades, pero en el perfecto entendido de que será indispensable organizar antes un ducto que asegure la consolidación de los esfuerzos colectivos porque son de tal magnitud los problemas que será imposible resolverlos con esfuerzos unilaterales.

Esta es la expresión plural y pluralista del concepto del Pacto Social, que apunta hacia todos, que proviene de todos y que, por supuesto, tiene un vocero: el candidato presidencial que mejor interpreta la realidad nacional, el candidato presidencial de Acción Democrática que, sin duda alguna, actúa así por ser, precisamente, el candidato presidencial del Partido Social Demócrata de Venezuela.

El análisis ya de orden filosófico, hecho sobre esta misma realidad social, también nos indica que la organización política venezolana, sustentada en el sistema democrático, se finca en tres grandes principios: el principio de la libertad, el principio de la justicia y el principio de la solidaridad.

Estos principios renovados por la evolución que ha venido operando en la sociedad en general, nos obligan a pensar que la justicia debe tener un calificativo y que ya no basta con hablar de justicia, sino que hay que hablar de justicia social; y nos indican también que la libertad no sólo debemos entenderla circunscrita a la libertad en el ejercicio o para el ejercicio de los derechos políticos, sino que debe ser una libertad con sinónimo de **vida en libertad**, libertad aplicable a la vida misma y no simplemente a la participación en el ejercicio de los derechos políticos; así como que la solidaridad no puede entenderse divorciada de la justicia social, porque si la entendemos bajo conceptos de individualización pudiéramos colocarnos al servicio de un liberalismo no sólo pasado de moda sino también y principalmente divorciado del valor social atribuible al recurso humano que motoriza todo mejoramiento colectivo.

La actualización de estos conceptos matrices de la democracia clásica milita también en la razón de ser el Pacto Social.

Queremos extender la libertad política a la **vida en libertad**. Queremos extender la justicia a la **justicia social**. Eso sí, la justicia social auténtica y verdadera y no la que a manera de antifaz algunos se colocan para disimular las posiciones que tienen al servicio de los privilegiados. Y la solidaridad, tan útil para combatir al egoísmo, queremos también adjetivarla de social, para diferenciarla de la mutualidad, perteneciente al ayer de la organización política incipiente.

Mucha falta nos está haciendo en Venezuela estimular la humanización de la existencia mediante el auxilio de la solidaridad social, que es de raíces pluralistas y ocupa lugar antagónico al de la indolencia.

A veces pareciéramos consumidos por la desviación que nos hace sentir, personal o grupalmente, convertidos en valor prioritario frente a todo cuanto nos rodea.

De indiferentes nos convertimos en indolentes y sólo nos causa preocupación lo que nos toca muy de cerca. ¡Se impone apartarse

de esas desviaciones! Se impone alcanzar para todos los venezolanos la democracia cabalmente desarrollada, asegurando las condiciones reales que la hagan posible en los órdenes económico, tecnológico, científico, organizativo, político y cultural.

Cuando el Pacto Social se orienta a incentivar, a estimular el sentimiento de solidaridad social entre los venezolanos, está buscando realizar presupuestos consagrados en la Constitución de la República, pero presupuestos que no se han desarrollado suficientemente, por lo mismo de que nuestra realidad social presenta cuadros injustos, que solamente se explican por una falta de solidaridad, suficiente y rendidora, en quienes, con medios para hacerlo, se olvidan de contribuir al alivio de la vida de los demás.

AREAS CONCRETAS DE ACCION

Señalamos áreas concretas de la realidad nacional para hacer más real nuestra presentación del significado del Pacto Social propuesto por el Dr. Jaime Lusinchi en nombre de Acción Democrática. Areas sensibles, como las correspondientes a la educación, a la alimentación, a la salud pública y al petróleo, a los fines

de precisar cómo entendemos que las cubran los beneficios colectivos del Pacto Social.

EL TEMA DE LA EDUCACION

Los problemas educativos oscilan entre graves y gravísimos. Además, andamos desconcertados al no contar con parámetros bien determinados para definir cómo es, por cuál vía, que vamos a mejorar nuestro ineficiente proceso educativo.

Muchas críticas, lacerantes críticas contra ese sistema, pero todo ha sido dispersión en los esfuerzos. Hace falta, entonces, que quienes pueden contribuir al mejoramiento educativo del país establezcan los principios generales que sirvan para orientar la mayor atención hacia los aspectos donde esa atención vaya a producir mejores rendimientos. Desde luego que nadie discute que la educación es una y única, pero, en sus diferentes etapas, la educación debe merecer atención preferente en los niveles donde concentra a los más necesitados de auxilio oportuno.

La educación dirigida a la preescolaridad. La educación de los escolares. La educación secundaria, tiene que, necesariamente, merecer atención priorizada a la que se dispense a

la educación superior. Y no es que vayamos a entender que la educación superior debe abandonarse a su propia suerte, sino que en la distribución de atenciones se debe hacer el mayor esfuerzo en lo atinente a lo primordial, que es lo elemental.

Pero, en todo caso, para acordarnos con respecto a lo que debe ser la modificación del sistema educativo en Venezuela, el Pacto Social abre una oportunidad de conciliación. Vamos a armonizar los intereses. Vamos a armonizar los intereses de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los que buscan formación profesional, para determinar, en el momento que vivimos, qué es lo que más le interesa al país.

Dejar que continúen los conflictos diversificados en sus causas motrices pero unificados en cuanto a la pérdida de un rendimiento que ni siquiera alcanza niveles medios es dejar que nuestro proceso educativo continúe empeorando, como sin darnos cuenta de que el daño cae, directamente, sobre el recurso humano destinado a tomar las riendas en el futuro de la vida nacional.

La idea del Pacto Social, al llamar a la conciliación o factores importantes de la produc-

ción y de la colectividad nacional, tiene que referirse a estos aspectos tan importantes de la vida del país, porque el fracaso de la educación hay que atribuirlo a la capacidad del sistema establecido para resolver los problemas de mayor entidad colectiva.

EL TEMA DE LA ALIMENTACION

Otro aspecto palpitante es el que se refiere a la alimentación. Tenemos serísimos problemas en esta materia y casi no nos damos cuenta porque comemos todos los días y más de una vez.

¿De dónde proviene la comida que ingerimos? Cada día nos hacemos más dependientes de la importación. En productos de origen agrícola, estamos importando cerca del 80%. Lo que quiere decir, que cada día somos menos dueños de nuestra propia subsistencia. ¿Cómo puede hablarse de progreso? ¿Cómo puede hablarse de mejoramiento social? ¿Cómo puede hablarse de mejoramiento económico, si somos cada vez menos dueños de nuestra propia capacidad para subsistir? Hace falta aplicar correctivos en la producción rural en general, tanto de alimentos vegetales como de alimentos animales. Y, a los efectos de que no continuemos

haciendo esfuerzos muchas veces diversificados y hasta contraproducentes; a los efectos de que un día establezcamos un auxilio para determinar actividad rural y luego lo eliminemos, como hemos visto que se hizo con el subsidio para los alimentos concentrados para animales, se requiere ponerse de acuerdo, conciliarse y entender que hay aspectos de la vida nacional que no pueden abandonarse al vaivén del campo de pareceres, porque es el interés general del país, el que reclama la firmeza de unas actuaciones que sirvan para realizar políticas firmes también, en el campo referente a la atención de las necesidades primarias de los venezolanos.

El Pacto Social, referido a la producción de alimentos, busca concertar un acuerdo entre los factores de la producción, los obreros del campo, los campesinos, los empresarios, medianos y pequeños productores, la industria, (porque este contrasentido, de tener la agroindustria sometida al rendimiento mermado que le impone la falta de materia prima, dependiente como es de la importación en casi todos sus renglones, es algo que no puede continuar) a los efectos de procurar la economía nacional autosostenida.

Los hechos concretos formarán parte del plan de gobierno, pero el Pacto Social referido a la producción rural significará homogeneizar la preparación de las condiciones que abonarán la conducta gubernamental.

Sin la premisa del acuerdo sobre lo que hay que hacer, continuaremos perdiendo esfuerzos, recursos, tiempo y credibilidad de parte del común de la gente.

PETROLEO Y OTROS ASPECTOS

Estos mismos razonamientos pueden hacerse en materia de salud pública y en materia de vivienda, dos manifestaciones igualmente críticas de los desajustes que vive actualmente el país. Como pueden y deben hacerse en materia de política petrolera, porque hemos logrado la nacionalización de la industria petrolera; con sano orgullo mostramos esa nacionalización como un logro de la democracia política venezolana, sin violencia y sometiéndonos a las pautas de la ley, pero la angustia también ha llegado a tocar las puertas de esa industria, hasta el punto de discutirse el régimen al cual se la ha sometido últimamente, en lo que atañe al aseguramiento de los recursos financieros necesarios para su desenvolvimiento autóno-

mo. En el Congreso, Acción Democrática ha presentado proyectos para salvaguardar, preservar y custodiar el patrimonio de la industria petrolera nacional, amenazada como se la considera de descapitalización y de consiguiente endeudamiento, que podría poner en peligro la propia nacionalización, de la cual tanto —y con toda razón— nos enorgullecemos.

El Pacto Social no puede inadvertir esta apremiante manifestación de la realidad nacional y debe contribuir a rodearla de las seguridades indispensables, haciendo que el Estado, dueño de la industria petrolera nacionalizada, los trabajadores, como aportantes del único factor insustituible en el proceso de producción y toda esta complejidad que gira en torno a la fuente por excelencia que tenemos para nuestra vida económica por todos y en todo momento, a los fines de sacar del vaivén de los pareceres individuales, o grupales, o circunstanciales, lo que tiene que ver con el interés superior de la colectividad nacional en general.

Por esto decimos que el Pacto Social, como su propio nombre lo indica, es complejo, apunta hacia un inmenso espectro y busca despertar interés en todos aquellos que forman parte de las áreas comprendidas en él.

Además decimos que todos los enfoques divididos por áreas a intentarse mejorar, mediante esta fórmula de entendimiento plural que proponemos, deberán ser precedidos por medidas de naturaleza económica aplicadas con la mayor urgencia, pues, mientras en el país continúe enseñoreado el desempleo, mientras los trabajadores sólo puedan contar con un salario cada vez más debilitado y mientras el producto nacional no se incremente mediante fórmulas capaces de impulsar la producción de alimentos, zafándonos de la monodependencia del petróleo, serán promesas vacuas las que se hagan en relación con el mejoramiento del modo de vivir que lleva hoy día la inmensa mayoría de los venezolanos.

GARANTIA DE CONTRIBUCION PLURAL

Razón tenía Manuel Peñalver al decir: “es que pensamos que debemos vivir un nuevo tiempo histórico”. Y estamos optimistas, creemos que lo podemos hacer, porque el proponente de la fórmula, que es nuestro candidato presidencial, representa, en sí y por sí, la seguridad absoluta de la contribución plural que en él se materializa. Contribución plural que propondría de Acción Democrática y de sectores

desprejuiciados de la población, que no se negarán al aporte que el país les está solicitando.

Esta pluralidad acciondemocratista, esta confluencia acciondemocratista, que se surte por igual del obrero, de trabajadores en general, de campesinos, de educadores, de profesionales, de técnicos, de los sectores de clase media y de empresarios con mentalidad progresista, le garantiza al país una concurrencia de esfuerzos conducentes al equilibrio que buscamos asegurar; y, por supuesto, como ductor de esa llamada a la confluencia, un Presidente con sensibilidad social, consciente de que él es el producto de un esfuerzo colectivo y que como Presidente, siendo él sujeto de lo que tendrá que hacer, nunca dejará de ser objeto de lo que la fuerza política, solidaria con él, está en el compromiso de realizar.

La fuerza política presente en Acción Democrática, en concordancia con la individualidad política que será en el país el presidente Jaime Lusinchi, es garantía para Venezuela de una efectividad, plural y pluralista, que no va a segregar sector alguno y que no va a imponer condiciones de subalternidad en perjuicio de otros sectores que se sumen al esfuerzo constructivo.

De llegar a ser Jaime Lusinchi un presidente dominado por complejos de superioridad; de llegar Jaime a la Primera Magistratura del Estado bajo el erróneo concepto de que lo que va a hacerle al país es el favor de gobernarlo; de llegar Jaime Lusinchi a creerse Presidente por obra y gracia exclusiva de sus méritos personales, de sus conocimientos, de su sabiduría, de sus aptitudes, de sus talentos, de sus capacidades, válido de todo lo cual gobernaría como un sol, razones habría para pensar que aquel cometido de requerimientos colectivos le resultaría un imposible; pero, como por su formación, por su concepción de la política, por filosofía de la vida, Jaime Lusinchi es parte inseparable de un modo de pensar y de actuar que lo hace vivir consciente de lo mucho que se puede hacer en provecho de los demás sabiendo despertar la solidaridad de la cual se siente permanentemente necesitado, su convocatoria al Pacto Social merece fe y debe ser interpretada como demostración humanizada de su pensamiento político al calor de los más nobles ideales.

CRECIMIENTO PROPIO

Para concluir, debo hacer constar ante ustedes que soy un entusiasta sincero de los

planteamientos que acabo de hacerles. No he venido a tratar de ganarle prosélitos a la candidatura presidencial de Acción Democrática, por cuanto estoy hablando ante gente que tiene posición comprometida. Por lo mismo, he venido a descarnar unos conceptos que ojalá en algo pudieran contribuir a propagar lo que todos nosotros estamos en la obligación de explicar, para despejar cualquier duda que, de buena fe, se pudiera tener respecto a la eficacia de lo que estamos ofreciendo; y porque, además, estoy absolutamente convencido de que el próximo gobierno, a ser presidido por Jaime Lusinchi, va a tener una característica de gran importancia. Va a ser un gobierno a ejercerse con sentido de colaboración y va a ser un gobierno a ejercerse con sentido de igualdad.

No por bondadoso, sino por conscientemente maduro en la formación acciondemocrata, Jaime Lusinchi es para nosotros promesa de ese tipo de gobierno que aspiramos se establezca pronto en el país.

LLAMADO A LA PARTICIPACION

Y mi invitación final es para que, por todos los medios a nuestro alcance, tratemos de explicar qué es lo que nos proponemos, porque

para muchos de nosotros la campaña electoral se vuelve una especie de carnaval que se sintetiza en la mayor suma de ruidos, en la mayor suma de actos efectistas y en la mayor suma de esfuerzos para impresionar. Y como estoy convencido de que ha llegado el momento en el cual hace falta que ejerzamos la política con sentido pedagógico; de que nos empeñemos en entendernos nosotros mismos y pongamos al servicio de la causa que nos reúne nuestros deseos de contribuir con el país al cual pertenecemos, formulo sinceros votos porque, así como nos entusiasmos para organizar caravanas de automóviles, para ir a mitines y formar parte de manifestaciones colectivas, nos dediquemos también, con todo entusiasmo, a estudiar, a tratar de entender qué es lo que somos, qué es lo que le ofrecemos al país, por qué estamos en condiciones de hacerlo, qué es lo que significamos como mujeres y hombres de un partido democrático y popular como es Acción Democrática y qué es lo que podemos contrastar con quienes nos adversan, bien vengan de las áreas de la izquierda radical o vengan de las áreas del conservatismo disfrazado.

De cualquier parte de donde vengan, nuestras razones no deben hacerse esperar, nuestras argumentaciones no tienen por qué fallar.

No digo que nos neguemos rotundamente a formar parte del carnaval electoral. Pero les ruego que, como gente consciente, como mujeres y hombres de partido con idea clara del compromiso que tenemos con el país, nos empeñemos en explicarle a los jóvenes, que nos quieren entender, nos quieren seguir y nos quieren acompañar, las razones por las cuales queremos contarlos entre los venezolanos que compartan las verdades que defendemos como procuradores de la mayor suma de bienes para el colectivo de los venezolanos.

Esa, creo yo, es nuestra misión por excelencia, Actuar como maestros en esta gran escuela que es Acción Democrática. El país nos lo agradecerá.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

APENDICE N° 2

Hemos considerado provechoso incorporar a este volumen parte de lo expuesto por el Dr. David Morales Bello en un reciente programa de televisión, en el cual respondió preguntas formuladas por el periodista Edgardo De Castro. Lo insertamos como Apéndice N° 2, en la seguridad de que sus respuestas en torno a la auténtica interpretación que debe darse al Pacto Social serán útiles en el definitivo esclarecimiento de esa fórmula política. Contribuirán también a evitar errores generalmente derivados de la falta de precisión por parte de algunos que han intentado la explicación de lo que es esa oferta.

Afirma David Morales Bello: El Pacto Social no es un programa para privilegiados.

“Pienso que, con intereses inconfesables, muchas personas que ni sienten ni quieren el Pacto Social, se han dado a la tarea de estar difundiendo interpretaciones que realmente no guardan correspondencia con la filosofía que lo anima. El país reclama una serie de concordancias, una armonía conceptual y funcional a los efectos de poder imprimirle marcha dinámica a la vida nacional. Pero eso debe hacerse dentro de una filosofía obediente a unos parámetros muy bien establecidos...”.

“Se ha pretendido presentar una imagen del Pacto Social conforme a la cual Jaime Lusinchi, como Presidente de la República y el Gobierno en general, deben aplicar la misma medida de atención y auxilio tanto a los sectores del capital como a los sectores del trabajo. Y eso es una desviación, una tergiversación que por suerte no hay el menor riesgo de que pudiera tener aceptación por parte del Presidente Lu-

sinchi o del Gobierno, porque tanto él como su administración y nosotros en Acción Democrática, estamos absolutamente conscientes de que, dentro de la igualdad de oportunidades que garantiza la Constitución Venezolana, es necesario darle un mayor auxilio, prestarle una mayor atención a quienes disponen de menores medios y que, por lo mismo, no pueden, si reciben un tratamiento igual, romper los diques de contención que todavía continúan padeciendo y alcanzar niveles de superación. Allí está la diferencia...”.

SE TERMINO DE IMPRIMIR
EN LOS TALLERES DE LA
EMPRESA "EL COJO", C. A.
EN CARACAS, VENEZUELA.
SEPTIEMBRE 1984

Ha de observarse que, como en otras oportunidades, el Dr. Morales Bello, entusiasta amigo del estudio y de la enseñanza, logra un sólido paso de avance en su actividad como ensayista dedicado a la difusión de temas relacionados con la historia y con la aplicación de las ideas sociales en el transcurrir vital. Refuerza el autor su lucidez como escritor sobre las áreas que integran el complejo universo de las ideas en función de la doctrina política y demuestra singular vocación para el ejercicio libre de la pedagogía, que evidentemente lo atrae como método para acercarse a las nuevas generaciones.

“EDICIONES ACULPUEBLO” presentó hace poco el volumen “ECONOMIA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO”, preparado por el mismo autor como un ensayo de análisis político centrado en la propuesta acciondemocratista. Esa obra fue dedicada especialmente a la juventud “bajo cuya responsabilidad continuará forjándose la Venezuela que a todos nos atrae”. Ahora, este nuevo volumen sobre materia afín se presentó con el propósito de continuar ofreciendo, a quienes dedican algo de su tiempo a revisar las expresiones ideológicas de nuestros dirigentes políticos, algunas otras referencias precisas del modo de pensar del autor.

Finalmente, y a manera de apéndice, insertamos otro trabajo del Dr. Morales Bello, correspondiente a una de las conferencias dictadas por él durante la campaña electoral nacional que culminó con las votaciones generales celebradas el 4 de diciembre de 1983, con el propósito de explicar la fórmula del “PACTO SOCIAL” presentada por el ahora Presidente de la República de Venezuela, Dr. Jaime Lusinchi.